

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : Juzgado de Letras y Gar.de Lebu
CAUSA ROL : C-284-2017
CARATULADO : ZÚÑIGA/empresa de transportes rurales Tur Bus Ltda.

Lebu, veinticuatro de enero de dos mil veinte.

VISTO:

A folio 1 comparecen **SEGUNDO AJENOR ZÚÑIGA BURGOS**, chofer, **EUNICE DEL CARMEN YEPSSEN MONSALVES**, dueña de casa, quien comparece por sí y en representación de su hijo menor de edad **FABIÁN IGNACIO ZÚÑIGA YEPSSEN**, estudiante, **NITZA PAMELA ZÚÑIGA YEPSSEN**, labores de casa y **ALEJANDRO AJENOR ZÚÑIGA YEPSSEN**, empleado, todos domiciliados en pasaje Los Claveles N° 35, Villa Santa Rosa, comuna de Lebu y **RAFAEL POBLETE SAAVEDRA**, abogado, domiciliado en calle Caupolicán 567, oficina 1101, Concepción, en representación judicial de **MARJORIE VANESSA ZÚÑIGA YEPSSEN**, interponiendo demanda civil de indemnización de perjuicios en juicio ordinario por responsabilidad extracontractual en contra de don **JAVIER ANDRÉS CARRASCO LEIVA**, empleado, domiciliado en calle Independencia N° 714, comuna de Los Álamos; en contra de don **CRISTIAN ISMAEL GALLARDO GÓMEZ**, conductor, domiciliado en sector Ovejería Alto, calle Santa Paulina N° 29, comuna de Osorno y en contra de la sociedad **EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA** o Tur Bus Limitada, del giro de su denominación, domiciliada en calle Jesús Diez Martínez (ex calle Dolores) N° 730 y N° 800, comuna Estación Central, representada legalmente por don Víctor Alejandro Ide Benner, ingeniero (o por quien lo represente, reemplace o subrogue en su cargo), del mismo domicilio de su representada, en su calidad de propietaria del vehículo conducido por don Cristian Ismael Gallardo Gómez, para que sean condenados a pagarles solidariamente las sumas de dinero que indica en consideración a los fundamentos de hecho y de derecho que señala.

Funda su demanda señalando que don Segundo Zúñiga Burgos y doña Eunice Yepsen Monsalvez son los padres y que Nitza Pamela, Marjorie Vanessa, Fabián Ignacio y Alejandro Ajenor Zúñiga Yepsen, son los hermanos de Sofía Lorena Zúñiga Yepsen (Q.E.P.D.), quien había contraído matrimonio en el año 2008 con Enoc Jeremías Barto Rojas (Q.E.P.D.), los que tuvieron dos hijos, Benjamín Enoc (Q.E.P.D.) y Pablo Andrés Barto Zúñiga (Q.E.P.D.), quienes sufrieron un accidente de tránsito el 8 de octubre de 2013 en la comuna de Los Álamos que les produjo a los cuatro la muerte en ese instante y lugar, dadas las graves lesiones que les fueron ocasionadas. Agrega que el 8 de octubre de 2013, siendo alrededor de las 21:20 horas aproximadamente, en circunstancias que don Enoc Barto Rojas, en compañía de su esposa Sofía Zúñiga Yepsen y los hijos de ambos Benjamín Enoc y Pablo Andrés Barto Zúñiga, conducía el vehículo automóvil



Foja: 1

marca Hyundai, modelo Accent, placa patente SH-5595 por la ruta 160 en dirección Lebu – Los Álamos, a la altura del kilómetro 119, sector Toco Toco, comuna de Los Álamos, sufrió un impacto o colisión de roce por parte del vehículo marca Toyota, modelo Corolla, placa patente YA-1738, que venía en sentido contrario, en dirección Los Álamos – Lebu, conducido por el demandado Javier Andrés Carrasco Leiva, quien imprudentemente y sin estar atento a las condiciones del tránsito había intentado efectuar una maniobra de adelantamiento a un móvil que lo antecedió, procediendo a traspasar para ello el eje central de la calzada, pero al percatarse que se enfrentaba al vehículo conducido por Enoc Barto Rojas intenta regresar a su pista, colisionando “de roce” con la parte izquierda de su vehículo a la parte izquierda del automóvil en que venía Enoc Barto y su familia, produciendo que este último vehículo se desestabilizara y traspasara el eje central de la calzada, para entonces enfrentarse al bus que venía detrás del vehículo conducido por el señor Carrasco Leiva, bus marca Mercedes Benz, placa patente FWVR-12, de propiedad de la empresa demandada Tur Bus Limitada, conducido por el también demandado Cristian Ismael Gallardo Gómez, quien de manera descuidada e imprudente procede inexplicablemente a acelerar la velocidad del bus, produciéndose la fatal colisión entre este y el automóvil conducido por Enoc, en la que fallecieron de manera instantánea el propio señor Barto Rojas, su esposa doña Sofía Zúñiga Yepsen y los hijos de ambos Benjamín Enoc y Pablo Andrés Barto Zúñiga, de 4 y 1 año de edad, respectivamente.

Señalan que el certificado de defunción de Enoc Barto Rojas indica como causa de muerte “politraumatismo/conductor de vehículo accidentado/accidente de tránsito”; el de Sofía Zúñiga Yepsen indica como causa de muerte “Politraumatismo/pasajero de auto accidentado/accidente de tránsito”; en tanto que los de sus hijos Benjamín Enoc y Pablo Andrés Barto Zúñiga, señalan ambos como causa de muerte “Traumatismo cráneo encefálico/pasajero de vehículo accidentado/accidente de tránsito”.

Afirman que el demandado Javier Carrasco Leiva manejaba descuidadamente, no estaba atento a las condiciones del tránsito en ese momento, efectuó una maniobra de adelantamiento a un móvil que lo antecedió sin tener el tiempo ni espacio suficiente para realizar dicha maniobra, traspasando con parte de su estructura el eje de la calzada, sin percatarse que se enfrentaba al vehículo conducido por Enoc Barto Rojas, intentando luego regresar a su pista, pero colisionando de roce a aquel vehículo. Asimismo, el demandado Cristian Gallardo Gómez, conductor del bus que venía inmediatamente detrás del vehículo conducido por el señor Carrasco Leiva, lo hacía igualmente desatento de las condiciones del tránsito, puesto que al observar la colisión por roce de los otros dos vehículos y percatarse que el conducido por el señor Barto Rojas se desestabilizó y cruzaba el eje de la calzada, no detiene ni disminuye su velocidad, sino por el contrario, inexplicablemente acelera la velocidad del bus, provocando la fatal colisión entre su vehículo y el conducido por el señor Barto Rojas. Por parte de don Enoc Barto Rojas no existió culpa alguna, ni siquiera concurrente, ni se expuso imprudentemente al daño,



Foja: 1

pues solo conducía su vehículo a una velocidad permitida conforme las reglas del tránsito.

Sostienen que a raíz de los hechos ocurridos la Fiscalía de Lebu inició la investigación RUC 1300986335-9, en la que inexplicablemente se persiguió únicamente la responsabilidad del conductor del automóvil, don Javier Carrasco Leiva y no la del conductor del bus, don Cristian Gallardo Gómez, aun cuando existían antecedentes que indicaban su igual y concurrente responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior y dado el hecho que consideran a ambos conductores responsables de la ocurrencia de las colisiones y del fallecimiento del grupo familiar de su hija y hermana, señalan primeramente que la responsabilidad de Javier Andrés Carrasco Leiva, conductor del vehículo marca Toyota, modelo Corolla, placa patente YA-1738, no puede ser puesta en duda en esta causa civil, puesto que ella quedó establecida en la respectiva causa penal. En efecto, puestos los hechos en conocimiento del Ministerio Público, este a través de la Fiscalía de Lebu dedujo requerimiento de procedimiento simplificado en contra del Sr. Carrasco Leiva en los autos RIT 601-2015 del Juzgado de Garantía de Lebu, seguida por cuatro cuasidelitos de homicidio, expresándose textualmente en dicho requerimiento: *“1.- Los Hechos: “El día 08 de octubre de 2013, cerca de las 21:20 horas, en circunstancias que el imputado Javier Andrés Carrasco Leiva conducía por la ruta 160 en dirección Lebu-Los Álamos (dirección sur poniente) el vehículo marca Toyota modelo Corolla placa patente única YA-1738 y a la altura del kilómetro 119, sector Toco Toco de la comuna de Los Álamos, en forma imprudente y debido a que no conducía atento a las condiciones de tránsito del momento, efectuó una maniobra de adelantamiento a un móvil no identificado que lo antecedió, sin tener el tiempo ni espacio suficiente para realizar dicha maniobra, traspasando con parte de su estructura el eje de calzada demarcada con línea discontinua, colisionando de roce con el automóvil marca Hyundai, modelo Accent, placa patente única SH-5595, que conducía en sentido contrario, dirección nororiente, Enoc Jeremías Barto Rojas, y por proyección, éste último colisionó con el bus marca Mercedes Benz, placa patente única FWVR-12, de la empresa Tur Bus, y que era conducido por Cristian Gallardo Gómez en dirección sur poniente. Producto de lo anterior, fallecieron en forma instantánea, a consecuencia de politraumatismos, el conductor del vehículo marca Hyundai modelo Accent, Enoc Jeremías Barto Rojas, y sus acompañantes, Sofía Lorena Zúñiga Yepsen, Pablo Andrés Barto Zúñiga y Benjamín Enoc Barto Zúñiga”. 2.- Calificación jurídica: A juicio de esta fiscalía los hechos descritos son constitutivos de cuatro cuasidelitos de homicidio, previstos y sancionados en el artículo 492, en relación con el artículo 490 N° 1, ambos del Código Penal, en grados de desarrollo consumados.”*

Posteriormente, con fecha 11 y 12 de mayo de 2016 se realizaron audiencias de juicio oral simplificado al final de las cuales se dictó veredicto condenatorio en contra del imputado Javier Andrés Carrasco Leiva; con fecha 19 de mayo de 2016 se dictó sentencia condenatoria por el Juzgado de Garantía de Lebu, la que en su parte



Foja: 1

resolutiva, en la parte que interesa, dispuso: *“I.- Que, SE CONDENA, al requerido JAVIER ANDRÉS CARRASCO LEIVA, ya individualizado, como autor de cuatro cuasidelitos de homicidio cometidos respecto de las víctimas Enoc Jeremías Barto Rojas, Sofía Lorena Zúñiga Yepsen, Pablo Andrés Barto Zúñiga y Benjamín Enoc Barto Zúñiga, por hechos ocurridos el día 08 de octubre de 2013 en la comuna de Los Álamos, imponiéndosele la pena de doscientos cincuenta días de reclusión menor en su grado mínimo, suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de dos años y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena. II.- Que, al reunirse los requisitos del artículo 4 de la Ley 18.216, se le concede al sentenciado la pena sustitutiva de REMISIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, con un período de observación de un año, debiendo oficiarse a Gendarmería de Chile para su cumplimiento, en su oportunidad. III.- Que, no se condena en costas al encartado, al haber tenido motivo plausible para litigar y estar representado por la Defensoría Penal Pública.”* Este fallo fue confirmado por la I. Corte de Apelaciones de Concepción, que en sentencia de 12 de julio de 2016, Rol Corte 457-2016, rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado Javier Carrasco Leiva.

Argumentan que en la especie se encuentran ante un accidente de tránsito con resultado de cuatro muertes, causadas por la conducta temeraria e ilegal, por un lado, del conductor del vehículo marca Toyota modelo Corolla placa patente única YA-1738, el demandado Javier Andrés Carrasco Leiva, de cuyo descuido y poca atención a las condiciones del tránsito derivó, en conjunto con el actuar del señor Gallardo Gómez, en el accidente de estos autos. En consecuencia, la responsabilidad de este demandado, conductor de uno de los vehículos causantes del accidente fatal, es una circunstancia incontrovertible y que se deriva los antecedentes que obran en la causa criminal a que han hecho alusión y de los demás que incorporarán a estos autos. En efecto, este demandado infringió una serie de normas de la Ley 18.290, entre las cuales podemos señalar: artículo 108: *“Todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley, sin que motivo alguno justifique el desconocimiento o incumplimiento de ellas. Asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento”*; artículo 120: *“El conductor de un vehículo que adelante o sobrepase a otro, deberá hacerlo por la izquierda y a una distancia que garantice seguridad, y no volverá a tomar la pista de la derecha hasta que tenga distancia suficiente y segura delante del vehículo que acaba de adelantar o sobrepasar”*. Se hace aplicable también lo dispuesto en el artículo 165: *“Toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin consideración de los derechos de éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecidas en esta ley, será responsable de los perjuicios que de ello provengan”*.

Agregan que respecto del demandado Cristian Gallardo Gómez existen antecedentes que indican que tampoco conducía el bus perteneciente a la empresa Tur



Foja: 1

Bus Limitada atento a las condiciones del tránsito, sino que por el contrario efectuó maniobras imprudentes y descuidadas que contribuyeron a provocar la segunda y fatal colisión. En efecto, de la declaración de este demandado en la mencionada causa penal, en donde describe la dinámica del accidente, se desprende que *“ese mismo vehículo, de color verde oscuro, lo inviste a él de frente, cruzó la pista, perdió el control producto del roce. Hizo unos zigzagueos antes de investirlo. Piensa que no reaccionó bien; que con los nervios aceleró en vez de frenar, son reacciones de segundos”*. El hecho que este conductor ante una colisión de roce de dos vehículos no haya realizado la maniobra lógica que cualquier conductor prudente hubiera realizado, esto es, frenar su vehículo, sino por el contrario acelerarlo, contribuyó a la producción de la segunda y fatal colisión del vehículo conducido por Enoc Barto Rojas. Es un indicativo que el señor Gallardo no iba atento a las condiciones del tránsito; que no guardó la prudente distancia entre el vehículo que le antecedió para frenar ante cualquier emergencia y que no conducía a una velocidad razonable como para considerar posibles riesgos (en circunstancias que existían adelantamientos en una sola vía de doble sentido) y que le hubiese permitido controlar el vehículo en caso de emergencia para evitar la colisión. En efecto, este demandado infringió una serie de normas de la Ley 18.290, entre las cuales se pueden señalar: artículo 108: *“Todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley, sin que motivo alguno justifique el desconocimiento o incumplimiento de ellas. Asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento”*; artículo 126: *“El conductor deberá mantener, con respecto al vehículo que lo antecede, una distancia razonable y prudente que le permita detener el suyo ante cualquier emergencia”*; artículo 144: *“Ninguna persona podrá conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles. En todo caso, la velocidad debe ser tal, que permita controlar el vehículo cuando sea necesario para evitar accidentes”*. Se hacen aplicables además los siguientes: artículo 165: *“Toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin consideración de los derechos de éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecidas en esta ley, será responsable de los perjuicios que de ello provengan”*; artículo 167: *“En los accidentes del tránsito, constituyen presunción de responsabilidad del conductor, los siguientes casos: N° 2: No estar atento a las condiciones del tránsito del momento. N° 7: Conducir a mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no razonable y prudente, según lo establecido en el artículo 144.”* "N° 17: No mantener una distancia razonable y prudente con los vehículos que le anteceden".

Sostienen que ambos conductores demandados, señores Carrasco Leiva y Gallardo Gómez, han cometido de manera conjunta los ilícitos mencionados con resultado de muerte del grupo familiar de su hija y hermana, integrado además por su



Foja: 1

esposo y sus dos pequeños hijos. Es decir, cada uno con su acción desplegada ha contribuido o tenido influencia causal en el trágico resultado fatal. Se hace aplicable entonces el artículo 2.314 del Código Civil, que indica que *"el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización"*, además de lo señalado en el artículo 2.317 del mismo cuerpo legal, en cuanto a que *"Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito"*. Por esta razón demandan por responsabilidad extracontractual a estos dos conductores para que sean condenados de manera solidaria a pagar los perjuicios que se les ha ocasionado, derivados del fallecimiento de las cuatro víctimas fatales.

En subsidio, para el caso que se estimare que no existe solidaridad entre estos dos demandados, procede que ellos sean condenados en forma simplemente conjunta o mancomunada, en la proporción que el tribunal fije o determine, pidiendo primeramente al tribunal que fije la proporción en que deben responder cada uno de estos dos demandados en consideración a la influencia causal que tuvieron sus respectivas conductas en la producción del daño. En subsidio, para que el caso que este tribunal no estimare fijar las sumas en que debe responder cada uno de estos dos demandados, procede que se les condene a pagar la indemnización por partes iguales.

Por otro lado, afirman que la responsabilidad de la sociedad demandada EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA o Tur Bus Limitada y por tanto su obligación de indemnizar los perjuicios que han sufrido, se encuentra establecida dada su calidad de propietaria del vehículo bus marca Mercedes Benz, placa patente FWVR-12, conducido por el señor Carrasco Leiva, hecho también acreditado en la causa penal, sin perjuicio de la prueba que se rendirá oportunamente. Al efecto, el artículo 169 incisos 1º y 2º de la Ley 18.290 dispone: *"De las infracciones a los preceptos del tránsito será responsable el conductor del vehículo. El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente."* Por esta razón, sostienen que demandan a esta empresa para que sea condenada de manera solidaria con el conductor del vehículo de su propiedad a pagar los perjuicios que se les ha ocasionado, derivados del fallecimiento de las cuatro víctimas fatales, su hija y hermana, además de su esposo e hijos. Señalan que los hechos de autos les han causado un grave daño moral, producto de la muerte de las cuatro víctimas referidas, en las circunstancias antes relatadas.

Se ha resuelto que la existencia de daño moral por la muerte de un familiar cercano y querido es indudable y también que es un hecho evidente que no requiere de mayor demostración. Sobra decir que conforme el principio de la normalidad en materia probatoria es indudable que la muerte de las cuatro víctimas referidas les ocasionó a los



Foja: 1

actores graves daños morales, ya que han padecido un sufrimiento psicológico evidente, como le habría significado a cualquier persona la muerte de un ser querido en las circunstancias antes relatadas, ya que es imborrable una experiencia como la descrita, que se traduce en dolores, privaciones, pesar, depresión, miedo, temor, frustración y demás secuelas, todas las cuales persisten hasta el día de hoy y para el futuro, pues se trata de secuelas permanentes, alterándose sus condiciones normales de vida.

Indican que el daño moral escapa a la prueba directa de las partes y su apreciación queda entregada al tribunal, pero para los efectos procesales pertinentes avalúan el daño moral propio sufrido por cada uno de ellos, derivado de la muerte de sus familiares, en las siguientes cantidades por las cuales demandan de manera solidaria a los demandados: 1) para SEGUNDO AJENOR ZÚÑIGA BURGOS la suma de \$ 50.000.000 por la muerte de su hija Sofía Lorena Zúñiga Yepsen; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su nieto Benjamín Enoc Barto Zúñiga; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su nieto Pablo Andrés Barto Zúñiga y la suma de \$ 10.000.000 por la muerte de su yerno Enoc Jeremías Barto Rojas, esto es, la suma total de \$ 120.000.000; 2) para EUNICE DEL CARMEN YEPSSEN MONSALVES la suma de \$ 50.000.000 por la muerte de su hija Sofía Lorena Zúñiga Yepsen; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su nieto Benjamín Enoc Barto Zúñiga; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su nieto Pablo Andrés Barto Zúñiga y la suma de \$ 10.000.000 por la muerte de su yerno Enoc Jeremías Barto Rojas, esto es, la suma total de \$ 120.000.000; 3) para MARJORIE VANESSA ZÚÑIGA YEPSSEN la suma de \$ 50.000.000 por la muerte de su hermana Sofía Lorena Zúñiga Yepsen; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Benjamín Enoc Barto Zúñiga; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Pablo Andrés Barto Zúñiga y la suma de \$ 10.000.000 por la muerte de su cuñado Enoc Jeremías Barto Rojas, esto es, la suma total de \$ 120.000.000; 4) para NITZA PAMELA ZÚÑIGA YEPSSEN la suma de \$ 50.000.000 por la muerte de su hermana Sofía Lorena Zúñiga Yepsen; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Benjamín Enoc Barto Zúñiga; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Pablo Andrés Barto Zúñiga y la suma de \$ 10.000.000 por la muerte de su cuñado Enoc Jeremías Barto Rojas, esto es, la suma total de \$ 120.000.000; 5) para ALEJANDRO AJENOR ZÚÑIGA YEPSSEN la suma de \$ 50.000.000 por la muerte de su hermana Sofía Lorena Zúñiga Yepsen; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Benjamín Enoc Barto Zúñiga; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Pablo Andrés Barto Zúñiga y la suma de \$ 10.000.000 por la muerte de su cuñado Enoc Jeremías Barto Rojas, esto es, la suma total de \$ 120.000.000; 6) para FABIÁN IGNACIO ZÚÑIGA YEPSSEN la suma de \$ 50.000.000 por la muerte de su hermana Sofía Lorena Zúñiga Yepsen; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Benjamín Enoc Barto Zúñiga; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Pablo Andrés Barto Zúñiga y la suma de \$



Foja: 1

10.000.000 por la muerte de su cuñado Enoc Jeremías Barto Rojas, esto es, la suma total de \$ 120.000.000.

Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto en los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, artículo 169 y demás pertinentes de la Ley 18.290 y artículos 2.314 y siguientes del Código Civil, solicitan tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de los demandados ya individualizados, acogerla a tramitación legal, darle lugar y en definitiva declarar:

1.- Que existió culpa concurrente o compartida de los demandados Javier Carrasco Leiva y Cristian Gallardo Gómez en el accidente de autos y, como consecuencia, se acoge la demanda en contra de ellos condenándolos a pagar solidariamente: 1) a don SEGUNDO AJENOR ZÚÑIGA BURGOS la suma de \$ 50.000.000 por la muerte de su hija Sofía Lorena Zúñiga Yepsen; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su nieto Benjamín Enoc Barto Zúñiga; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su nieto Pablo Andrés Barto Zúñiga y la suma de \$ 10.000.000 por la muerte de su yerno Enoc Jeremías Barto Rojas, esto es, la suma total de \$ 120.000.000.-; 2) a doña EUNICE DEL CARMEN YEPSEN MONSALVES la suma de \$ 50.000.000 por la muerte de su hija Sofía Lorena Zúñiga Yepsen; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su nieto Benjamín Enoc Barto Zúñiga; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su nieto Pablo Andrés Barto Zúñiga y la suma de \$ 10.000.000 por la muerte de su yerno Enoc Jeremías Barto Rojas, esto es, la suma total de \$ 120.000.000.-; 3) a doña MARJORIE VANESSA ZÚÑIGA YEPSEN la suma de \$ 50.000.000 por la muerte de su hermana Sofía Lorena Zúñiga Yepsen; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Benjamín Enoc Barto Zúñiga; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Pablo Andrés Barto Zúñiga y la suma de \$ 10.000.000 por la muerte de su cuñado Enoc Jeremías Barto Rojas, esto es, la suma total de \$ 120.000.000.-; 4) a doña NITZA PAMELA ZÚÑIGA YEPSEN la suma de \$ 50.000.000 por la muerte de su hermana Sofía Lorena Zúñiga Yepsen; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Benjamín Enoc Barto Zúñiga; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Pablo Andrés Barto Zúñiga y la suma de \$ 10.000.000 por la muerte de su cuñado Enoc Jeremías Barto Rojas, esto es, la suma total de \$ 120.000.000.- y, 6) a don FABIÁN IGNACIO ZÚÑIGA YEPSEN la suma de \$ 50.000.000 por la muerte de su hermana Sofía Lorena Zúñiga Yepsen; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Benjamín Enoc Barto Zúñiga; la suma de \$ 30.000.000 por la muerte de su sobrino Pablo Andrés Barto Zúñiga; y la suma de \$



Foja: 1

10.000.000 por la muerte de su cuñado Enoc Jeremías Barto Rojas, esto es, la suma total de \$ 120.000.000.- En subsidio, para el caso que se estimare que no existe solidaridad entre estos dos demandados, piden que igualmente acogiendo la demanda en contra de ellos se declare que se los condena en forma simplemente conjunta o mancomunada: a) en la proporción que este tribunal fije o determine, en consideración a la influencia causal que tuvieron sus respectivas conductas en la producción del daño; b) en subsidio, por partes iguales, quedando facultado este tribunal para acoger la demanda, ya sea por el total de lo demandado o por la suma que se determine, respecto de aquel demandado que se estime que tuvo culpa única en el accidente.

2.- Que para el caso en que sea condenado el demandado Cristian Andrés Gallardo Gómez a pagar cualquier suma de dinero derivada de su responsabilidad en el accidente de autos, sea la demandada EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA igualmente condenada a pagar dicha suma de manera solidaria, en razón de ser la propietaria del vehículo conducido por el señor Gallardo Gómez.

3.- Se faculta a este tribunal para que cualquiera sea la forma en que se acoja la demanda, pueda fijar por concepto de daño moral para cada uno de los cuatro actores, sumas mayores o menores a las demandadas por cada uno de ellos, con los reajustes e intereses que este tribunal determine y desde y hasta las fechas que se estime procedentes.

4.- Que en caso de acogerse la demanda y ser condenados los demandados al pago de una indemnización, cualquiera que fuere el monto de la misma, se les condene en costas.

A folio 10 comparece el demandado don **Javier Andrés Carrasco Leiva**, contestando la demanda, solicitando se rechace íntegramente en atención a los argumentos que expone, consistentes en que nunca ha desconocido el hecho que se encontraba el día en el lugar de los hechos, colaborando con la investigación en todo aquello que está dentro de sus posibilidades para que se esclareciera el penoso incidente. Agrega que se trata de un hecho lamentable, con resultados que no puede reparar ni emocional ni económicamente. Respecto del daño moral, afirma que estos están por sobre toda racionalidad, sin perjuicio de ser carga de la parte demandante probarlos legalmente.

A folio 25 comparece el abogado MARIO MÜNZENMAYER BELLOLIO, en representación convencional de la Empresa de Transportes Rurales Limitada, contestando demanda interpuesta en su contra, pidiendo que ella sea rechazada íntegramente, con condena en costas de los demandantes, por las razones de hecho y de derecho que expone.

Opone, en primer lugar, excepción de prescripción extintiva de la acción, afirmando que es un hecho que el accidente que causó la muerte de don Enoc Barto Rojas, doña Sofia Zuñiga Yepsen y de Benjamín y Pablo Andrés Barto Zuñiga acaeció el día 8 de octubre de 2013 y que la demanda de autos fue notificada a su parte el día 23



Foja: 1

de octubre de 2017. Que el artículo 2332 del Código Civil dispone que prescriben en cuatro años, desde la perpetración del acto, las acciones indemnizatorias civiles derivadas de delitos o cuasidelitos y demás contenidas en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil; de ese modo toda posible (e improbable) responsabilidad civil que se estime pudiere asistir a Empresa de Transportes Rurales Limitada a causa del accidente de tránsito en que se funda la demanda de autos, se encuentra en todo caso indefectiblemente prescrita conforme a la ley y así pide que se declare, rechazando en todas sus partes la demanda.

En segundo lugar, alega la falta de legitimación activa de los demandantes que a continuación indica. Sostiene que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2315 del Código Civil, puede pedir la indemnización derivada de un delito o un cuasidelito, la víctima inmediata o directa sobre la que recae la lesión o sus herederos. El Profesor Hernán Corral Talciani sostiene que a falta de quien sufrió el daño, pueden intentar la acción sus herederos a título universal, es decir, los herederos de los legitimados por derecho propio. Agrega que la regla del art. 2315 del Código Civil también es aplicable a los casos de daños personales y específicamente del daño moral, pues respecto de ellos se aplican en virtud del artículo 952 inc.1° los principios generales de transmisibilidad de los derechos.

En el caso de autos afirma que las cuatro personas fallecidas no dejaron descendencia ni cónyuges sobrevivientes, por lo que debe aplicarse el orden de sucesión establecido en el artículo 989 del Código Civil, según el cual son herederos de los difuntos los ascendientes más próximos. Así, los únicos herederos legitimados para ejercer la acción indemnizatoria son el señor Segundo Zuñiga Burgos y doña Eunice del Carmen Yepsen Monsalves, en su calidad de padres y abuelos, respectivamente, de Sofía Lorena Zuñiga Yepsen y de Benjamín y Pablo Andrés Barto Zúñiga. Por su parte, los demás demandantes doña Marjorie Vanessa Zuñiga Yepsen, doña Nitza Pamela Zuñiga Yepsen, don Alejandro Zuñiga Yepsen y don Fabián Ignacio Zuñiga Yepsen no son herederos de ninguna de las cuatro víctimas y ninguno de los demandantes es heredero de don Enoc Jeremías Barto Rojas. En consecuencia, carecen de legitimación activa para ejercer la acción indemnizatoria de autos las personas siguientes: a) Don Segundo Zúñiga Burgos y doña Eunice del Carmen Yepsen Monsalves respecto de su yerno Enoc Jeremías Barto Rojas; b) Doña Marjorie Vanessa Zuñiga Yepsen, doña Nitza Pamela Zuñiga Yepsen, don Alejandro Zúñiga Yepsen y don Fabián Ignacio Zuñiga Yepsen carecen de toda legitimación para demandar, por lo que corresponde entonces rechazar la demanda por ellos ejercida en esta causa.

En tercer término, alega la falta de competencia para conocer y decidir un ilícito penal. Argumenta que la demanda de autos reclama a don Cristian Gallardo Gómez el pago de indemnizaciones conforme al artículo 2314 del Código Civil, por haber cometido este conjuntamente con Javier Carrasco Leiva, los cuasidelitos de homicidio de Enoc Barto Rojas, Sofía Lorena Zuñiga Yepsen y Benjamín y Pablo



Foja: 1

Andrés Barto Zuñiga, fundando su demanda en que la responsabilidad penal por esos cuasidelitos fue establecida en el juicio criminal RIT 601-2015, del Juzgado de Garantía de Lebu, en el cual se condenó por sentencia firme a Javier Carrasco Leiva como autor de esos cuatro cuasidelitos de homicidio; insiste la demanda que esos cuatro cuasidelitos habrían sido "*cometidos de manera conjunta*" por los señores Carrasco y Gallardo, por lo que ambos habrían contribuido al resultado muerte, debiendo responder ambos solidariamente de todo el perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, porque las muertes causadas en el accidente de tránsito se deben a la conducta temeraria e ilegal del demandado señor Carrasco "*en conjunto con el actuar del Sr. Gallardo Gómez*", cuya responsabilidad "*...deriva de los antecedentes que obran en la causa criminal a que hemos hecho alusión...*" (Nº4 de la demanda).

Sostiene que se trata entonces, al decir de los actores, de la comisión de un único y mismo hecho penal ejecutado por dos personas, respecto del cual el Ministerio Público "*inexplicablemente persiguió únicamente la responsabilidad del conductor del automóvil, don Javier Carrasco Leiva, y no la del conductor del bus, don Cristian Gallardo Gómez, aun cuando existían antecedentes que indicaban su igual y concurrente responsabilidad en los hechos*" (Nº3 de la demanda), por lo que solicitan los demandantes que los conductores Carrasco y Gallardo sean condenados solidariamente al pago de las indemnizaciones, en razón de lo previsto en el artículo 2317 del Código Civil, porque en su opinión se trataría en la especie de un delito o cuasidelito cometido por dos o más personas (Nº 6 de la demanda). Señala que en resumen se ha demandado civilmente en estos autos al señor Gallardo Gómez porque en opinión de los actores civiles él sería un autor concomitante o accesorio del señor Carrasco en la comisión de los mismos cuasidelitos penales que ya fueron conocidos y sentenciados por el Tribunal Oral en lo Penal competente, en los autos criminales RIT 601-2015 de este mismo Tribunal.

Sin embargo, el señor Gallardo no fue parte en el proceso penal y, por consecuencia, ni la sentencia penal RIT 601-2015 ni ninguna otra sentencia penal le ha asignado autoría ni responsabilidad concomitante, concurrente ni conjunta con el señor Javier Carrasco Leiva en los cuasidelitos por los cuales este último fue condenado como único autor; esta es una cuestión importante, si el fundamento de la indemnización es la comisión de un ilícito penal específico no puede prosperar la demanda de indemnización sin que previamente se establezca judicialmente la participación culpable en los mismos cuasidelitos por los cuales fue condenado como único autor el señor Javier Carrasco Leiva, en razón de que es condición de procedencia de la acción indemnizatoria el que se establezca previamente que el señor Gallardo ha cometido o concurrido a cometer los mismos cuatro delitos culposos de homicidio por los cuales fue condenado el señor Carrasco. Pero como la sentencia condenatoria que se invoca en la demanda en nada se refiere al señor Gallardo, los demandantes pretenden suplir esa omisión provocando en este juicio una declaración de autoría concomitante o concurrente del señor Gallardo en tales cuasidelitos.



Foja: 1

Tal pretensión es totalmente errónea e inaceptable, porque este tribunal en cuanto tribunal en lo civil, no tiene atribución alguna para conocer ni juzgar delitos ni cuasidelitos penales, tampoco la tiene para ampliar, modificar complementar lo resuelto por sentencia ejecutoriada en sede penal; en efecto, la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, es de la competencia exclusiva y excluyente del Ministerio Público (artículo 83 de la Constitución Política y 3 del Código Procesal Penal). A su vez, el artículo 166 del Código Procesal Penal dispone que los delitos de acción pública como lo son los cuasidelitos de la demanda, serán investigados en conformidad a lo previsto en el Título I, del Libro Segundo de ese Código. Luego, el supuesto sobre el cual descansa la demanda de autos -la responsabilidad de su representado en la comisión de cuasidelitos de homicidio- no es materia que sea de la competencia del tribunal en lo civil. Esa investigación y determinación de la participación punible corresponde en exclusiva al Ministerio Público. Y el Ministerio Público ya hizo la investigación de los hechos penales en que se basa la demanda y llegó a la conclusión, en uso de sus atribuciones privativas, que el señor Cristián Gallardo Gómez no tuvo ninguna participación punible en la comisión de los cuatro cuasidelitos de homicidio. Y por esa razón es que no dedujo acusación en su contra. Es más, requirió su participación en el juicio penal como testigo de la acusación.

Destaca que el demandante no se opuso en su momento y en modo en sede penal a la exoneración de responsabilidad del señor Gallardo. Por eso ya no es el tiempo para sostener que "inexplicablemente" la Fiscalía de Lebu persiguió únicamente la responsabilidad del conductor del automóvil (Carrasco) y no la del bus (Gallardo). Reitera que este tribunal, en cuanto Juzgado en lo Civil, carece de competencia para juzgar delitos, establecer grados de participación criminal, asignar responsabilidades y aplicar penas penales, pues todas estas materias son de la competencia de los tribunales de juicio oral en lo penal o de los juzgados de garantía, así lo dispone el artículo 18 del Código Orgánico de Tribunales, por lo que no puede, entonces, este tribunal entrar a enmendar, ampliar o modificar lo actuado por el Ministerio Público ni lo decidido por el tribunal de garantía en lo penal, tampoco le es permitido avocarse a conocer de los hechos de un proceso penal ya fenecido por sentencia ejecutoriada, ni entrar a modificar sus declaraciones, atribuyendo en sede civil una participación culpable por causa de una supuesta coparticipación criminal en un delito en cuyo juzgamiento en sede penal ni siquiera fue parte.

Desde otro punto de vista, el señor Gallardo se encuentra amparado por la presunción de inocencia del art. 4 del mismo Código Procesal Penal, que dispone que "ninguna persona será considerada culpable ni tratado como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme", los efectos de tal presunción también son aplicables a la demanda de autos, lo que significa que en tanto no haya una sentencia penal a firme que la establezca, no podrá considerarse al señor Gallardo como culpable ni



Foja: 1

tratársele como tal ni obligarle al pago de indemnizaciones por supuestos coautorías penales. Indica que la Corte de Apelaciones de Santiago ha decidido que el juzgamiento de la imprudencia o negligencia penal escapan de la calificación del juez civil, ya que aquellas circunstancias deben ser investigadas, juzgadas y sentenciadas en el respectivo juicio criminal, por lo que el juez civil es absolutamente incompetente para conocer de la acción interpuesta para obtener la reparación del daño moral si no se ha impetrado la correspondiente acción (RDJ, T.79-A, 2a parte, Sec. 2º, p.60).

En subsidio, para el caso de estimarse que la acción no está prescrita, alega que no concurren las condiciones para acogerla por faltar los elementos de la responsabilidad extracontractual. Sostiene que la responsabilidad extracontractual, regulada en el Libro IV del Código Civil, es la que proviene de una acción u omisión ilícita que causa daño a otro, sea dolosa o culpable, que siendo que la regla general es la individualidad de la responsabilidad, la ley reconoce ciertos eventos de responsabilidad por el hecho de otros como hipótesis de responsabilidad vicaria; desde luego estas hipótesis exigen de la verificación de ciertos y determinados vínculos de dependencia jurídicamente relevantes, que determinan la posibilidad de formular un juicio de reproche al principal por los hechos de su dependiente o la persona bajo su tutela o guarda. Fuera de dichos casos específicos, la responsabilidad civil extracontractual es estricta y rigurosamente individual: sólo se responde por hechos propios.

La constatación anterior no sólo es un presupuesto de existencia de la responsabilidad extracontractual sino la medida o extensión de la misma: se responde sólo hasta concurrencia de los daños causados por un hecho negligente propio (los daños derivados de fuentes ajenas no son indemnizables por el mismo individuo) y en proporción a la participación efectiva. La solidaridad sólo puede tener fuente legal en materia extracontractual y nunca puede imponerse por sentencia judicial sin una ley habilitante de la misma. Estas consideraciones resultan particularmente importantes en el presente caso, toda vez que la pretensión de los demandantes es que la reparación de los daños causados a las víctimas sea soportada por dos terceros ajenos que no llevan responsabilidad alguna en los hechos de la demanda, Gallardo y su representada, en cuanto propietaria del bus que conducía este último.

En consecuencia y en subsidio de las alegaciones precedentes opone las siguientes excepciones a la demanda de autos:

1.- Inexistencia de responsabilidad extracontractual de la cual deba responder solidariamente la Empresa de Transportes Rurales Limitada, ya que se la demanda en cuanto propietaria del bus patente FWVR-12, para que pague solidariamente con el señor Cristián Gallardo Gómez las indemnizaciones a las que este pudiere ser condenado por su participación culposa en el accidente de tránsito con resultado de las cuatro muertes que se refiere en la demanda. A estos efectos afirma que no concurren los requisitos esenciales que la ley señala para configurar la responsabilidad extracontractual del señor Cristián Gallardo, cuales son: a) Que se haya cometido un hecho ilícito; b) Que



Foja: 1

el hecho ilícito sea imputable a culpa del agente; c) Que exista un daño indemnizable y d) Que haya una relación de causalidad entre la acción u omisión imputada y el resultado. En lo referente al primer requisito, afirma que la demanda se funda en la muerte de cuatro personas a consecuencia de una colisión de tres vehículos, todo lo cual fue investigado y acusado oportunamente por el Ministerio Público y juzgado y sentenciado por el Tribunal Oral en lo Penal de Lebu en los autos RIT 601-2015, el cual condenó a don Javier Carrasco Leiva como único autor de esos ilícitos. El presente líbello civil no atribuye participación culpable ni responsabilidad extracontractual directa ni indirecta en esos hechos a la Empresa de Transportes Rurales, de la cual ella deba responder, pero si la convoca a esta instancia judicial para hacer efectiva la hipotética solidaridad del propietario del vehículo para el pago de las indemnizaciones a las que eventualmente pudiere ser condenado el conductor del bus (art. 169 Ley N° 18.290); sin embargo, para hacer efectiva esa solidaridad es necesario que previamente se establezca en este juicio si el chofer del bus, don Cristián Gallardo Gómez, tuvo responsabilidad en la comisión del ilícito y los resultados de muerte en que se funda la demanda. A estos efectos su parte niega que don Cristián Gallardo Gómez haya tenido participación antijurídica en la comisión de los cuasidelitos en que se funda la demanda. En el día y hora de los hechos que señala la demanda, en circunstancias que el señor Gallardo conducía el bus placa patente FWVR-12 por su pista de circulación, en el sentido del tránsito y a velocidad reglamentaria, esa circulación le fue cortada u obstruida sorpresivamente, al traspasar el señor Barto el eje central de la calzada y ocupar la pista del bus, impactándolo de frente, totalmente dentro de la pista de circulación del bus.

Señala que el motivo por el cual el señor Barto traspasó el eje de la calzada e impactó al bus es consecuencia de la acción imprudente y culpable de un tercero, don Javier Andrés Carrasco Leiva, tal como lo relata la demanda y como quedó establecido en la sentencia a firme dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Lebu, en causa RIT 601- 2015, por la cual se condenó al señor Carrasco a una pena penal como único autor de los cuatro delitos de homicidio de la víctimas fatales de la colisión. Así las cosas, antes y al momento de ser sorpresivamente impactado por el vehículo del señor Barto, el señor Cristián Gallardo ejecutaba una actividad lícita, como lo es el conducir un bus de transporte interprovincial de pasajeros, lo que además hacía conforme a reglamentos y leyes del tráfico automotor, con prudencia, por su pista, en el sentido del tránsito y a velocidad reglamentaria. Dicho de otro modo, no hay conducta antijurídica por parte de don Cristián Gallardo porque su actuar antes, durante y después de la colisión en nada contradijo el ordenamiento jurídico ni tampoco configuró la comisión de alguna conducta prohibida o sancionada en la ley y, en consecuencia, no hay de su parte alguna participación punible en la comisión de delito ni cuasidelito ni alguna forma de negligencia o malicia que le obligue a reparar daño alguno (art. 2314 y 2329 Código



Foja: 1

Civil). Por el contrario, el señor Gallardo también fue víctima del actuar imprudente del tercero y no un autor más de la colisión.

Argumenta que tampoco es posible imputar culpa al conductor Cristian Gallardo, ya que los cuasidelitos de homicidio que motivan la presente acción civil de indemnización fueron ampliamente investigados por el Ministerio Público, que es el competente para llevar adelante y en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Esa investigación se debe llevar a cabo según lo previsto en el Título I, del libro Segundo de ese Código art. 166 CPP). La investigación que hizo el Ministerio Público de los hechos penales en que se basa la demanda determinó, en uso de su atribuciones privativas, que el Señor Cristián Gallardo Gómez no tuvo ninguna participación punible en la comisión de los cuatro cuasidelitos de homicidio, razón por la que no se dedujo acusación en su contra y, aún más, el Ministerio Público presentó al Sr. Gallardo como testigo de la acusación en el juicio penal tramitado en contra del señor Javier Carrasco Leiva.

Indica que no obstante lo determinado por el Ministerio Público en la esfera de su competencia privativa, la demanda invoca una eventual culpa del conductor del bus, señor Cristián Gallardo Gómez, atribuyéndole una actividad imprudente y culposa, concurrente con la culpa del señor Javier Carrasco Leiva, ya condenado como único autor de los cuasidelitos. Para sostener tal artificio argumentativo la demanda afirma que el conductor señor Cristián Gallardo Gómez habría sido imprudente, ya que "Procede inexplicablemente a acelerar la velocidad del bus, produciéndose la fatal colisión entre éste y el automóvil conducido por Enoc (Barto)...", lo cual niegan por no ser efectiva en lo absoluto esta errónea imputación fáctica de la demanda. Afirma que al parecer ella viene de la descontextualizada cita del proceso penal, que los actores copian en el N° 5 de la demanda: *"ese mismo vehículo, de color verde oscuro (el del sr. Barto) lo embiste a él de frente, cruzó la pista, perdió el control producto del roce. Hizo unos zigzagueos antes de embestirlo. Piensa que no reaccionó bien; que con los nervios aceleró, en vez de frenar, son reacciones de segundos"*. De lo transcrito, los actores deducen que el señor Gallardo se inculparía a sí mismo, pero su somera lectura basta para entender que Gallardo sostuvo exactamente lo contrario de lo que afirma la parte demandante. Es evidente que en ese testimonio el señor Gallardo no hablaba de sí mismo, sino que explicaba las maniobras que el señor Barto hizo en los instantes previos a estrellarse contra su bus. Por eso en su relato el señor Gallardo describe tales acciones como de una tercera persona, quien fue la que "me embistió de frente; cruzó la pista, perdió el control por el roce, hizo zigzagueos antes de embestirlo", es a esa descripción que Gallardo agregó su opinión personal respecto del obrar del señor Barto, en ningún caso puede entenderse, como erróneamente lo hace la demanda, que en ese testimonio el señor Gallardo estuviera refiriendo un obrar propio imprudente o negligente, tal interpretación no sería coherente con los hechos del accidente: a) El que embistió de



Foja: 1

frente al bus fue el vehículo del Sr. Barto; b) Quien cruzó sorpresivamente el eje central de la calzada invadiendo la pista del bus, fue el móvil del sr. Barto; c) El que sufrió la colisión por roce del tercer automóvil fue el señor Barto; d) El que perdió el control de su vehículo por el roce, fue el señor Barto; e) El que hizo zigzagueos antes embestir al bus, fue el vehículo del señor Barto.

Agrega que la demanda aventura que el señor Gallardo habría ido conduciendo sin estar atento a las condiciones del tránsito ni a velocidad razonable, como para considerar posibles riesgos, lo que le hubiese permitido controlar el bus en caso de emergencia; tal falacia no resiste análisis. Para demostrar su absurdo, si ella se usara para valorar la conducción del señor Barto, se podría concluir que éste tampoco iba atento a las condiciones del tránsito ni llevaba la velocidad y distanciamiento prudentes, porque enfrentado a la emergencia causada por el sr. Carrasco, el sr. Barto tampoco pudo controlar su vehículo, evitar la colisión por roce ni el zigzagueo de su vehículo, ni disminuir su velocidad hasta detenerse, ni evitar cruzar el eje central de la calzada, ni obstruir la marcha del bus ni evitar colisionar este móvil. Con la lógica de la demanda habría que concluir que al señor Barto le perjudicaría el no haber previsto que en cualquier momento otro conductor podría realizar una maniobra imprudente. O bien que le afectaría la presunción de culpa en la conducción que establece el N° 13 del artículo 157 de la Ley del Tránsito: "Salirse de la pista de circulación o cortar u obstruir sorpresivamente lo circulación reglamentaria de otro vehículo".

De lo que se viene tratando se desprende que la conducta del chofer señor Cristian Gallardo, no solo se sujetó a la normativa de los reglamentos del tránsito, sino que guardó la diligencia, cuidado y prudencia normales que habría empleado todo conductor en similares circunstancias (Art. 44 del Código Civil); la imputación que se hace al señor Gallardo de haber acelerado y no frenado la marcha del bus, no es efectiva y ella corresponde a un error de interpretación de la demanda, por lo tanto si la circunstancia que se le reprocha no es efectiva y el obrar de Carrasco y Barto escapan de su posibilidad de acción, cuidado o diligencia, no existe conducta de culpa alguna que pueda imputarse al sr. Gallardo. Por lo demás, como ya se anticipó, la causa de la muerte de la familia Barto Zúñiga fue el hecho culpable de un tercero, don Javier Carrasco Leiva, su accionar fue el que originó el resultado de muerte de las víctimas, porque él fue con su frustrada e impudente maniobra de adelantamiento, quien puso la condición que resultó ser la causa adecuada del hecho dañoso. Ese hecho de Carrasco es excluyente de toda noción de culpa y de responsabilidad directa o indirecta de Cristián Gallardo y/o de Empresa de Transportes Rurales Ltda.

Afirma que atendido que don Jaime Carrasco no tiene relación alguna con Gallardo ni es dependiente de su representada, no hay razón alguna por la cual la Empresa de Transportes Rurales Ltda. deba responder por sus actos. Al faltar el requisito de culpa del supuesto agente Sr. Cristian Gallardo, resulta que a su respecto no hay responsabilidad extracontractual que hacer efectiva, por lo que la demanda en su



Foja: 1

contra debe ser desestimada. Y desestimada que sea la demanda en contra del Sr. Gallardo, necesariamente debe también desestimarse la demanda en contra de su representada.

Alega también la inexistencia de relación causal entre el obrar de Cristian Gallardo y el resultado producido, ya que el artículo 166 de la Ley del Tránsito establece que el mero hecho de una infracción no determina la responsabilidad civil, si no existe una relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido por el accidente; así se siga cualquier teoría sobre nexo causal, lo cierto es que si Carrasco no intenta su imprudente maniobra de adelantamiento y provoca la colisión por roce al móvil de Barto nada habría sucedido, en la cadena de los hechos esa fue la causa eficiente o el acontecimiento preponderante en el resultado de muertes y daños o bien esa maniobra fue el hecho ilícito que generó el daño, por lo que él debe asumir íntegramente la indemnización. Destaca que la colisión fue entre Carrasco y Barto, que fueron los dos vehículos que chocaron entre sí con culpabilidad de uno o ambos conductores y luego, como consecuencia de esa colisión, uno de esos vehículos es lanzado a la pista contraria e impacta a un tercero (el bus) que no tiene responsabilidad infraccional. La demanda atribuye a este tercero la comisión de una serie de infracciones a las normas del tránsito, las cuales niegan porque ello no es efectivo.

Las muertes no fueron causadas por un hecho ilícito del señor Cristian Gallardo, por lo que falta la necesaria relación de causalidad porque si se considera que hubo muerte de cuatro personas estas fueron la consecuencia de la culpa de un tercero, del cual su representada no es responsable de modo alguno. Asimismo, alega la improcedencia de la solidaridad de su parte respecto del pago de las indemnizaciones a que fuere condenado Javier Carrasco Leiva, fundándose en dos aspectos: a) la demanda pide que conforme al artículo 2317 del Código Civil se condene a Javier Carrasco Leiva y a Cristian Gallardo Gómez a pagar solidariamente las indemnizaciones que se acordaren en favor de los demandantes y que, además, se condene a su representada a pagar solidariamente las indemnizaciones que sean cargo de Cristian Gallardo Gómez. La solidaridad del artículo referido dice relación solo con los autores del hecho que causa daño, por lo que las indemnizaciones a que fuere condenado Javier Carrasco Leiva no podrán hacerse extensivas a su representada, ya que el propietario del bus solo responde por el hecho de su conductor en conformidad al artículo 169 de la Ley del Tránsito, no por la responsabilidad derivada de un cuasidelito; b) De otra parte, para que opere la solidaridad del art. 2317 del Código Civil entre dos o más conductores responsables, ellos necesariamente deben ser autores de un mismo y único hecho del que derivan daños, como en el caso de dos vehículos que chocan entre sí, mediando culpabilidad de uno o ambos conductores y que luego impactan como consecuencia de tal hecho a un tercero que no tiene responsabilidad infraccional. Pero en estos autos no se da esa unidad del hecho ni la comisión conjunta de la infracción. Se debe distinguir que el choque fue entre los vehículos de Carrasco y Barto, sin intervención del bus de



Foja: 1

Gallardo, esa colisión la provocó solamente Carrasco. Luego, a consecuencia de esa colisión provocada por Carrasco, el vehículo de Barto fue lanzado a la pista contraria, como un objeto descontrolado, hasta que terminó estrellándose contra el bus de Gallardo sin que éste haya dado motivo alguno para ello. Este último se asemeja al típico ejemplo de la academia, en el que una persona empuja a otra y ésta cae sobre una vitrina, la que se destroza. Se dice que se debe condenar al primero y eximir de responsabilidad al sujeto que fue lanzado, ya que solo actuaba como un objeto. Lo curioso de la demanda es que quiere hacer pagar los daños al dueño de la vitrina y no al que lanzó el objeto sobre ella. Así las cosas, no hay unidad de hecho dañoso ni concurrencia de autores. Luego, no hay solidaridad entre Carrasco y Gallardo, ni se puede hacer extensiva a su parte las indemnizaciones que deba pagar el Sr. Carrasco.

Por último, en subsidio, alega la concurrencia en el pago de las indemnizaciones para el improbable caso de acogerse la demanda en contra de Cristian Gallardo Gómez. Sostiene que atendido que no hay solidaridad según se dijo anteriormente, alega que la conducta de Javier Carrasco Leiva es la que tuvo la mayor influencia causal en el resultado dañoso que se debe indemnizar, desde que si él no hubiere intentado una maniobra de adelantamiento imprudente no se habría producido la colisión ni la muerte de las cuatro víctimas. En consecuencia, don Javier Carrasco Leiva deberá ser quien soporte el pago de la proporción más alta de las indemnizaciones que se regulen, la que no podrá ser inferior a un 95% de ellas.

Por todo lo anterior, solicita que se tenga por contestada la demanda y, en definitiva, se declare:

a) Que se acoge la excepción de prescripción extintiva de la acción, por lo que se declara prescrita la acción de indemnización deducida en contra de su representada;

b) En subsidio, que se rechaza la demanda en todas sus partes con costas;

c) En subsidio, que se acoge la excepción de falta de legitimación activa y se declare que se rechaza, por no ser herederos ni estar habilitados para demandar, las acciones deducidas por las personas siguientes: 1. Don Segundo Zúñiga Burgos y doña Eunice del Carmen Yepsen Monsalves, respecto de su yerno Enoc Jeremías Barto Rojas; 2. Doña Marjorie Vanessa Zuñiga Yepsen, doña Nitza Pamela Zuñiga Yepsen, don Alejandro Zuñiga Yepsen y don Fabián Ignacio Zuñiga Yepsen respecto de todas las víctimas;

d) En subsidio, que se acoge la excepción de falta de competencia para conocer y juzgar la responsabilidad penal de Cristian Gallardo Gómez, rechazándose la demanda en su contra y de Empresa de Transportes Rurales Limitada;

e) En subsidio, que las indemnizaciones que se regulen deben dividirse entre los demandados en un 95% para el señor Javier Carrasco Leiva y un 5% para Cristian Gallardo Gómez o la proporción menor que este tribunal regule, pero en ningún caso inferior al 50%;

f) Que se hace lugar a la excepción del artículo 2330 del Código Civil y



Foja: 1

g) Que se condena en costas a los demandantes.

A folio 27 comparece el abogado FELIPE MÜNZENMAYER ABARCA, en representación del demandado CRISTIAN ISMAEL GALLARDO GÓMEZ, contestando demanda interpuesta en su contra pidiendo que ella sea rechazada íntegramente, con condena en costas de los demandantes, por las mismas razones de hecho y de derecho expuestas en la contestación de la demandada Empresa de Transportes Rurales Limitada, salvo que no alega la prescripción extintiva de la acción ejercitada por la parte demandante. Por último y en subsidio de las demás alegaciones formuladas, opone la excepción de fondo del artículo 2330 del Código Civil, esto es, que la apreciación de los daños está sujeta a reducción por el tribunal, atendido a que don Enoc Barto se expuso imprudentemente al daño dado que al momento de la colisión él conducía su vehículo con las luces apagadas, de noche, 21:30 horas aproximadamente y habiendo niebla que dificultaba la visibilidad, lo que fue declarado por los testigos en proceso penal RIT 601-2015. Alega además, en subsidio, la concurrencia en el pago de las indemnizaciones para el improbable caso de acogerse la demanda en contra de su representado y atendido que no hay solidaridad según se dijo anteriormente, fundado en que la conducta de Javier Carrasco Leiva es la que tuvo la mayor influencia causal en el resultado dañoso que se debe indemnizar, desde que si él no hubiere intentado una maniobra de adelantamiento imprudente, no se habría producido la colisión ni la muerte de las cuatro víctimas. En consecuencia, don Javier Carrasco Leiva deberá ser quien soporte el pago de la proporción más alta de las indemnizaciones que se regulen, la que no podrá ser inferior a un 95% de ellas.

En virtud de lo anterior, solicita se tenga por contestada la demanda y, en definitiva, se declare:

a) Que se rechaza la demanda en todas sus partes, con costas;

b) En subsidio, que se acoge la excepción de falta de legitimación activa y se declare que se rechazan, por no ser herederos ni estar habilitados para demandar, las acciones deducidas por las personas siguientes: 1. Don Segundo Zuñiga Burgos y doña Eunice del Carmen Yepsen Monsalves respecto de su yerno Enoc Jeremías Barto Rojas; 2. Doña Marjorie Vanessa Zuñiga Yepsen; doña Nitza Pamela Zuñiga Yepsen; don Alejandro Zuñiga Yepsen y don Fabián Ignacio Zuñiga Yepsen respecto de todas las víctimas;

c) En subsidio, que se acoge la excepción de falta de competencia para conocer y juzgar la responsabilidad penal de Cristian Gallardo Gómez, rechazándose la demanda en su contra;

d) En subsidio, que las indemnizaciones que se regulen deben dividirse entre los demandados en un 95% para el señor Javier Carrasco Leiva y un 5% para Cristian Gallardo Gómez o en la proporción menor que el tribunal regule pero en ningún caso inferior al 50%;

f) Que se hace lugar a la excepción del artículo 2330 del Código Civil y



Foja: 1

g) Que se condena en costas a los demandantes.

A folio 31 rola réplica de la parte demandante, en la cual señalan que en relación a la contestación de la demanda de don Javier Andrés Carrasco Leiva, sostienen que este demandado reconoce los hechos señalados en la demanda, al menos los indicados a su respecto. En efecto señala que nunca ha desconocido el hecho que se encontraba el día, en el lugar de los hechos, colaborando con la investigación en todo aquello que está dentro de sus posibilidades, para que se esclareciera este penoso accidente; que se trató de un hecho lamentable, con resultados que no puede reparar ni emocional ni económicamente; que los montos solicitados por los actores por daño moral están por sobre toda racionalidad, siendo cargo de la demandante probarlos legalmente. Destaca el reconocimiento realizado por ese demandado, en cuanto a que si bien se considera responsable del “hecho lamentable”, se excepciona únicamente indicando que se encuentra en una imposibilidad de reparar los daños ocasionados, lo que en definitiva no constituye una real defensa o excepción. Este actor no indica parámetro o argumento alguno para calificar de irracionales los montos solicitados por los actores por daño moral, sin perjuicio de que efectivamente esa parte probará en las instancias procesales pertinentes el daño moral alegado.

En cuanto a la contestación de la demandada de Empresa de Transportes Rurales Limitada o Tur Bus Ltda., afirman que la excepción de prescripción extintiva debe ser rechazada ya que no ha sido opuesta en forma clara, al no precisar las fechas de inicio y término del cómputo del plazo de prescripción que se alega. De la sola lectura del capítulo de la contestación referido a esta excepción se constata que la demandada solo indicó la fecha desde la cual ella interpreta que comenzaría a correr el cómputo de prescripción que alega (8 de octubre de 2013), pero no especificó la fecha de término del referido plazo. Así, al plantearse esta excepción perentoria la demandada ha incumplido el requisito imperativo que le impone el artículo 309 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, esto es, contener la contestación la exposición clara de los hechos en que se apoya las excepciones que se oponen a la demanda. El criterio que se adopta respecto al artículo 1698 del Código Civil haciendo gravitar sobre el actor la carga de probar la existencia de los hechos que invoca como fundamento de su acción, es idéntico al criterio respecto del demandado, a quien se le asigna el peso de probar los hechos en que se basa su excepción, por considerarse que al plantear esta forma de defensa destinada a enervar la pretensión de su contendor, se convierte en actor o demandante. De este modo, el demandado estaría imposibilitado de acreditar un fundamento de su excepción que no ha alegado, en este caso la fecha del término del cómputo del plazo de prescripción. Indican que para que opere la prescripción extintiva es necesaria, al menos, la concurrencia de dos requisitos: la inactividad del titular en el ejercicio del derecho y que esa inactividad se haya prolongado durante cierto lapso de tiempo. Se hace necesario entonces que quien la alega aporte elementos de información como la individualización de las obligaciones cuya extinción por prescripción se pretende, la



Foja: 1

época en que ellas se hicieron exigibles y, particularmente, la fecha en que según su interpretación se habría cumplido el plazo de prescripción. Así las cosas, el hecho de incumplir el demandado tal imperativo al fundar suficientemente su excepción de prescripción, impide al tribunal ponderarla, razón por la cual ella debe ser rechazada.

Agregan que el término de prescripción extintivo alegado no se ha cumplido, puesto que ha operado la interrupción civil, ya que el codemandado solidario Sr. Gallardo Gómez fue notificado de la demanda con fecha 7 de octubre de 2017, previo a que se cumpliera cualquier plazo de prescripción. Al efecto, la responsabilidad de la demandada EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA y por tanto su obligación de indemnizar los perjuicios que sufrieron los actores, se encuentra establecida dada su calidad de propietaria del vehículo bus marca Mercedes Benz, placa patente FWVR-12, conducido por el también demandado Sr. Gallardo Gómez. El artículo 169 incisos 1º y 2º de la Ley 18.290 dispone: “De las infracciones a los preceptos del tránsito será responsable el conductor del vehículo. El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente.” Por esta razón se ha demandado a esta empresa para que sea condenada de manera solidaria con el conductor del vehículo de su propiedad, a pagar los perjuicios que se ocasionaron a los actores, derivados del fallecimiento de las cuatro víctimas fatales, donde aparece que se trata de un caso de solidaridad legal, establecida en el propio texto de la ley, lo que hace ineludiblemente aplicable el artículo 2519 del Código Civil, que establece que “La interrupción que obra en favor de uno de varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad, y no se haya ésta renunciado en los términos del artículo 1516”, por lo que es indiscutible que respecto del demandado Sr. Gallardo Gómez ha operado la interrupción civil. Y existiendo norma legal que establece solidaridad entre él (conductor del vehículo) y el propietario del mismo, y habiendo sido ambos demandados de manera solidaria, es indiscutible asimismo que la interrupción civil que ha obrado en perjuicio del Sr. Gallardo Gómez, lo ha sido también respecto de su codeudor solidario Tur Bus Limitada, puesto que por un lado dicha solidaridad existe legalmente y, por otro, ella no ha sido renunciada en los términos que indica el mismo artículo.

Respecto de la falta de legitimación activa de determinados demandantes, sostienen que niegan la interpretación que realiza esa demandada sobre la legitimación activa, capacidad para demandar exigible en caso de solicitar una indemnización de perjuicios por daño moral derivada de responsabilidad extracontractual por la comisión de un ilícito; la clásica jurisprudencia reiteradamente ha dicho que “tratándose de daño moral pueden demandar su reparación la víctima inmediata o directa, esto es, la persona misma en quien recae la lesión, ofensa o injuria que lo causa, y los que sin tener esa



Foja: 1

calidad también lo sufren en razón de que el daño inferido a aquélla los hiere en sus propios sentimientos o afectos, incluso aun cuando no sean sus herederos o parientes”. En este mismo sentido el profesor José Luis Diez Schwerter en su obra “El Daño Extracontractual”, expone que son sujetos activos de la acción de reparación del daño moral: 1º La víctima inmediata o directa, que es aquél en “quién recae la lesión, ofensa o injuria que lo causa” y 2º Las víctimas por repercusión, que son todos aquellos que sin tener la calidad de víctimas inmediatas o directas, también lo sufren en razón de que el daño inferido a las víctimas directas los hiere en sus propios sentimientos o afectos, o les lesiona algún interés o derecho extrapatrimonial del que son titulares, no requiriéndose que entre ellos exista vinculación jurídica, “aun cuando no sean herederos o parientes”. En esta última situación, agrega este autor, se podrán encontrar, entre otros, al cónyuge de la víctima directa, sus parientes, sus amigos, novio(a), compañeros de trabajo, etc.; todos los que, en teoría, podrían demandar la reparación de su propio daño moral, legalmente nada se los impide. Pero en definitiva solo resultarán reparados quienes prueben la existencia de este perjuicio y la concurrencia de los requisitos que lo hacen resarcible. Señala que es precisamente el caso de autos, en que han accionado por un lado don Segundo Zúñiga Burgos y doña Eunice del Carmen Yepsen Monsalves por el daño moral experimentado por ellos por el fallecimiento de su hija, yerno y nietos y, por otro, Marjorie, Nitza, Alejandro y Fabián Zúñiga Yepsen, por el daño moral experimentado por el fallecimiento de su hermana, cuñado y sobrinos, actores que sin duda han sufrido un enorme detrimento en sus propios afectos y sentimientos al perder para siempre a sus seres queridos, por lo que el único límite razonable que se puede imponer para acceder a reparar un daño moral es que sus titulares activos hayan acreditado su existencia y la concurrencia de los requisitos que lo hacen indemnizable; cumpliéndose con ello no hay razón legal alguna para negar su resarcimiento, más aún cuando la vida demuestra que los vínculos afectivos entre parientes son particularmente fuertes.

Respecto de la falta de competencia para conocer y decidir un ilícito penal, indican que en una copia textual de la excepción dilatoria deducida por la defensa del Sr. Gallardo, ha alegado la incompetencia absoluta de este tribunal para conocer de estos autos, sosteniendo que el Sr. Gallardo no fue parte en el proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía correspondiente en el que se investigaron los hechos y, por lo tanto, la sentencia penal allí dictada ni ninguna otra sentencia penal le ha hecho responsable de los cuasidelitos que ahora se le pide indemnizar. Agregan que sin comisión de un delito o cuasidelito penal establecido previamente la indemnización del art. 2314 del Código Civil no puede prosperar en contra del Sr. Gallardo (pareciera que se defiende más a éste demandado que a la empresa Tur Bus Ltda.), puesto que sería condición de procedencia de la acción indemnizatoria el que se estableciere que el Sr. Gallardo cometió algún delito o cuasidelito. En razón de ello indica este demandado que este tribunal carecería de toda atribución para conocer y juzgar los hechos constitutivos



Foja: 1

de delitos, así como para modificar lo resuelto por sentencia ejecutoriada en sede penal, careciendo de facultades para investigar hechos delictivos, citando diversas normas de la Constitución Política de la República y del Código Procesal Penal, no teniendo facultades para juzgar hechos delictivos ni para determinar responsabilidades penales, finalizando con que la demanda atentaría contra la “presunción de inocencia” del Sr. Gallardo, establecida en el artículo 4° del mismo Código, concluyendo que en este procedimiento falta un requisito previo, cual es una sentencia penal firme que condene al Sr. Gallardo como autor de los cuasidelitos que se le pide indemnizar. A este respecto replican que la presente excepción de falta de competencia opuesta por éste demandado parte de un supuesto totalmente erróneo o equivocado, que hace desplomar toda su fundamentación: No es efectivo que para deducir una acción civil de indemnización de perjuicios por daño moral como la que se ha deducido en el presente juicio, se requiera que exista –como necesaria condición de validez y procedencia- una sentencia penal previa firme y ejecutoriada, que haya condenado al Sr. Gallardo como autor de tales ilícitos penales. Ello se desprende del propio texto de nuestra ley. El artículo 67 del Código Procesal Penal expresamente señala: "Independencia de la acción civil respecto de la acción penal. La circunstancia de dictarse sentencia absolutoria en materia penal no impedirá que se dé lugar a la acción civil, si fuere legalmente procedente." En efecto, no existe respecto del demandado Sr. Gallardo sentencia penal alguna que dé cuenta de alguna acusación en su contra, formalización, condena o absolución. No se ha determinado en procedimiento criminal alguno su responsabilidad o inocencia respecto de los hechos que causaron los perjuicios que en la presente demanda se pide indemnizar. De modo que niegan que con su presente demanda se afecte su presunción de inocencia, puesto que aún no se ha establecido ni su responsabilidad ni inocencia en procedimiento alguno, ya que ello jamás fue discutido. Es entonces clara la independencia del presente procedimiento civil, respecto de aquella sentencia en sede penal en la cual el Sr. Gallardo ni siquiera fue acusado, formalizado, condenado o absuelto. A tal extremo llega la independencia de estas acciones, que incluso el texto de la ley se pone en un caso mucho más extremo: aquél en que el acusado obtuvo sentencia absolutoria. Y se dice que incluso en tal caso sí procederá la acción civil. Con mayor razón entonces procederá la acción civil respecto de un demandado que no ha obtenido ni sentencia absolutoria ni de ninguna clase. Además, es pertinente considerar que estamos ante un problema de responsabilidad civil, que no emana de un delito o cuasidelito penal, sino del daño ocasionado y, por lo tanto, entrará a operar cada vez que este se produzca de manera culpable, con independencia de que la conducta que lo ocasionó se encuentre o no tipificada como un ilícito penal. La tipificación nada añade a la responsabilidad civil. Destacan que conforme a las normas de competencia establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, este tribunal es absolutamente competente para conocer del presente asunto, ya que la naturaleza o materia de la acción deducida es de aquellas que pueden conocerse por este tribunal. Así el artículo 45



Foja: 1

del COT dispone que los Jueces de Letras conocerán: 2° En primera instancia: a) De las causas civiles y de comercio cuya cuantía exceda de 10 Unidades Tributarias Mensuales. Asimismo, en consideración a la cuantía de la pretensión, también es competente. Finalmente, los litigantes de autos tampoco gozan de fuero alguno. Adicionalmente, señala es también competente relativamente en atención al factor territorio, puesto que de conformidad al artículo 141 del COT “Si los demandados fuesen dos o más y cada uno de ellos tuviere su domicilio en diferente lugar, podrá el demandante entablar su acción ante el juez de cualquier lugar donde esté domiciliado uno de los demandados, y en tal caso quedarán los demás sujetos a la jurisdicción del mismo juez” y del mérito de autos se desprende que uno de los demandados, el Sr. Carrasco Leiva, efectivamente tiene su domicilio en la comuna de los Álamos, donde este tribunal ejerce competencia.

Respecto de la alegación subsidiaria de rechazo de la demanda por no concurrir algunas de las condiciones necesarias para acogerla, reiteran que el señor Gallardo conducía el bus perteneciente a la empresa Tur Bus Limitada sin estar atento a las condiciones del tránsito y que por ello efectuó maniobras imprudentes y descuidadas que contribuyeron a provocar la segunda y fatal colisión. Sin duda el hecho que este conductor ante una colisión de roce de dos vehículos no haya realizado la maniobra lógica que cualquier conductor prudente hubiera realizado, esto es, frenar su vehículo, contribuyó a la producción de la segunda y fatal colisión del vehículo conducido por Enoc Barto Rojas. Es un indicativo que el Sr. Gallardo no iba atento a las condiciones del tránsito; que no guardó la prudente distancia entre el vehículo que le antecedió para frenar ante cualquier emergencia y que no conducía a una velocidad razonable como para considerar posibles riesgos (en circunstancias que existían adelantamientos en una sola vía de doble sentido) y que le hubiese permitido controlar el vehículo en caso de emergencia para evitar la colisión. Es por ello que reiteran que el Sr. Gallardo efectivamente infringió los artículos 108, 126, 144, 165, 167 N° 2, 7 y 17 de la Ley 18.290, de esta manera la participación antijurídica del Sr. Gallardo en el accidente de autos viene dada por la forma en que enfrentó el contacto de roce que se produjo en la vía que recorría y que de haber respetado las normas de tránsito pertinentes, pudo haber evitado el desenlace fatal, por lo que no es correcto señalar que únicamente el demandado Sr. Carrasco ha desplegado exclusivamente una acción imprudente y culpable, sino que ambos Sres. Carrasco y Gallardo, cada uno con su acción desplegada ha contribuido o tenido influencia causal en el trágico resultado fatal.

En este entendido, agregan, se hace plenamente aplicable la solidaridad invocada respecto del Sr. Gallardo, tal como lo indica el artículo 2314 del Código Civil, que señala que "el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización", además de lo señalado en el artículo 2317 del mismo cuerpo legal, en cuanto a que “Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito”. Por esta razón han demandado por responsabilidad



Foja: 1

extracontractual a estos dos conductores para que sean condenados de manera solidaria a pagar los perjuicios que se ha ocasionado a los actores, derivados del fallecimiento de las cuatro víctimas fatales, hija y hermana de aquellos, además de su esposo e hijos.

La solidaridad de la demandada Tur Bus Ltda. concurre en los hechos por aplicación del artículo 169 de la Ley de Tránsito dada su calidad de propietaria del vehículo bus marca Mercedes Benz, placa patente FWVR-12, conducido por el Sr. Carrasco, hecho también acreditado por los certificados del vehículo, ya acompañados a esta causa. Por ello han solicitado que para el caso en que sea condenado el demandado Cristian Andrés Gallardo Gómez a pagar a los demandantes cualquier suma de dinero derivada de su responsabilidad en el accidente de autos, sea la demandada EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA (Tur Bus Ltda.) igualmente condenada a pagar dicha suma de manera solidaria, en razón de ser la propietaria del vehículo conducido por el Sr. Gallardo Gómez.

En relación a la proporción en que deben ser condenados los demandados, indica que se debe recordar a este respecto que han solicitado que ellos sean condenados a pagar a los actores la indemnización por daño moral que este tribunal determine de manera solidaria por el total de lo que eventualmente se ordene indemnizar y solo en el caso que se estime que no existe solidaridad entre estos dos demandados (Sres. Carrasco y Gallardo), han pedido subsidiariamente que igualmente acogiendo la demanda en contra de ellos se declare que se los condena en forma simplemente conjunta o mancomunada: a) en la proporción que este juzgado fije o determine, en consideración a la influencia causal que tuvieron sus respectivas conductas en la producción del daño; b) en subsidio, por partes iguales. Y que para el caso que en que sea condenado el demandado Cristian Andrés Gallardo Gómez a pagar cualquier suma de dinero a los actores derivada de su responsabilidad en el accidente de autos, sea la demandada EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA igualmente condenada a pagar dicha suma de manera solidaria, en razón de ser la propietaria del vehículo conducido por el Sr. Gallardo Gómez.

Por último, en relación a la contestación de don Cristian Ismael Gallardo Gómez, sostienen que este demandado ha contestado la demanda en idénticos términos que la demandada EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA (Tur Bus Ltda.), constituyendo ambas una sola y única defensa, actuando ambas demandadas de consuno y coordinadamente (al grado de oponer las mismas defensas en contestaciones idénticas, señalar la misma dirección y la misma forma de notificación electrónica), de modo que por razones de economía procesal reitera las argumentaciones señaladas, referido a la réplica respecto de dicho demandado, los cuales reitera para todos los efectos legales.

A folio 39 el abogado FELIPE MÜNZENMAYER ABARCA, en representación del demandado Cristián Gallardo Gómez evacúa el traslado de la dúplica, señalando que su representada reitera los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en su contestación, los que el demandante no pudo desvirtuar en su réplica, en especial, la



Foja: 1

réplica no pudo explicar cuál sería la culpa de Gallardo Gómez, salvo unas citas no fundamentadas de alguna regulación de la Ley del Tránsito, ni tampoco pudo explicar la relación de causa a efecto que debería haber mediado entre la conducta desplegada por el señor Gallardo Gómez –conducir por su pista a velocidad reglamentaria- y el resultado de muertes de cuatro personas; la réplica se limita a decir que no frenó, sin que esa afirmación tenga sustento alguno.

Respecto de la falta de legitimación activa de los demandantes, la replicante invoca una sentencia y la opinión de un memorista para decirnos que la titularidad de la acción la puede tener cualquiera que se sienta herido en sus sentimientos. Su parte prefiere quedarse con el texto expreso del art. 2315, en relación con los artículos 952 inc.1º y 989, todos del Código Civil, que invoca al contestar la demanda: sólo pueden pedir la indemnización del daño causado con el delito o cuasidelito el que ha sufrido el daño o sus herederos.

En cuanto a la falta de competencia del Tribunal para conocer de un ilícito penal, afirma que el replicante quedó atrapado en sus propios dichos, en que el fundamento que tuvieron para accionar en contra del señor Gallardo Gómez, lo hicieron consistir en que este también era autor de los mismos cuatro cuasidelitos penales por los cuales fue condenado el señor Carrasco en sede penal; los actores tuvieron que recurrir a esta figura de autoría de los mismos cuasidelitos penales del señor Carrasco, a fin de hacer responsable solidariamente a Gallardo en el pago de indemnizaciones y acceder, por esa vía, al patrimonio de la Empresa de Transportes Rurales Ltda. para asegurar el pago; la única jurisdicción llamada a decidir si Gallardo Gómez también cometió esos mismos cuatro cuasidelitos penales es la judicatura penal: Ministerio Público acusando y el Tribunal oral en lo penal juzgando. Lo anterior es de toda evidencia, por eso es que los demandantes al replicar están modificando el fundamento de su demanda. Ahora en el apartado 2 de la página 5 del escrito de réplica, dicen que la responsabilidad civil de Gallardo “... no emana de un delito o cuasidelito penal, sino del daño ocasionado (...) la tipificación nada añade a la responsabilidad civil”. Para la demanda Gallardo es autor de cuatro cuasidelitos de homicidio, en autoría compartida con el Sr. Carrasco, por lo que ambos debían indemnizar solidariamente y para la réplica, en cambio, ya no tiene importancia tipificar penalmente la conducta de Gallardo en esos cuasidelitos de homicidio, porque además su responsabilidad civil no emana de esos ilícitos penales. Sin embargo, es sabido, por mandato legal, que una vez contestada la demanda ya no puede ser modificada (Art. 261 CPC.) Luego, el cambio que quiere introducir la réplica debe ser desestimado. Pero, si en definitiva se aceptare el cambio en el fundamento de la demanda, entonces también tendrá que aceptarse y declararse, en contrapartida, que no hay solidaridad entre los señores Gallardo y Carrasco, pues el artículo 2317 del Código Civil resulta ser inaplicable al caso de autos, porque en ese evento no hay unidad en la ejecución de un mismo y único hecho común. Para afirmar su alegación la réplica cita en su apoyo la regla de la independencia de la acción civil respecto de la acción penal



Foja: 1

que establece el artículo 67 del Código Procesal Penal. Sin embargo, ella incurre en un error pues en lo que interesa no concurre la circunstancia fundamental sobre la cual se ha construido la regla del art. 67 citado, cual es el “que haya sentencia absolutoria en materia penal”. Sostiene que no hay ningún juicio penal en que haya sido parte el señor Gallardo Gómez y que haya terminado por sentencia absolutoria ni condenatoria, es decir, respecto de Gallardo no hay sentencia absolutoria ni condenatoria, pero lo que efectivamente existe es la sentencia condenatoria de don Javier Carrasco, como único autor de los cuatro cuasidelitos a que se refiere la demanda de autos. Por ello, siguiendo el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, hacen valer en este juicio civil esa sentencia condenatoria de fecha 19 de mayo de 2016, recaída en los autos penales RIT 601-2015 del Juzgado de Garantía de Lebu, para demostrar que ya es cosa juzgada que el único responsable de las muertes cuya indemnización se reclama es el citado señor Javier Carrasco y no el señor Gallardo Gómez. Siendo los hechos del proceso penal los mismos que se exponen en el presente juicio civil, no es admisible que en este juicio civil se concluya algo distinto en cuanto a la autoría, participación e imputabilidad en la comisión de los cuatro cuasi delitos de homicidio. La división entre tribunales penales y civiles tiene por único objetivo una separación de los asuntos según la especialización, pero ello no los transforma en una especie de estancos en que cada cual puede resolver como estime. La administración de justicia y la jurisdicción es una sola, por lo que no es posible en una sede concluir en forma opuesta a lo decidido previamente en otra sede. En concreto, si el Ministerio Público como ente persecutor y un tribunal con jurisdicción, concluyeron que en el Sr. Javier Carrasco es el único responsable de las muertes de las cuatro personas referidas en la demanda, no es posible que en sede civil se concluya algo distinto a aquello. Lo anterior es sin perjuicio de la incompetencia de este Tribunal, en razón de la materia sometida a su conocimiento y decisión, cual es la responsabilidad penal de Gallardo Gómez.

Respecto de la excepción del artículo 2330 del Código Civil, sostiene que la réplica no se hizo cargo de ella, por lo que no controvertió sus fundamentos. De ese modo, han quedado como hechos no controvertidos que don Enoc Barto se expuso imprudentemente al daño, dado que al momento de la colisión él conducía su vehículo con las luces apagadas, de noche, a las 21:30 horas, aproximadamente y habiendo, además, niebla que dificultaba la visibilidad. Así las cosas, el señor Barto cometió la infracción grave del artículo 200 N°15 de la Ley de Transito N° 18.290, consistente en “conducir un vehículo sin luces en las horas y circunstancias en que las exige esta ley o sus reglamentos”. Conducir de noche, sin luces, es especialmente grave. La gravedad de esta omisión se comprende aún mejor a la luz del Decreto Supremo N° 181, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, publicado en el Diario Oficial de 22 de diciembre de 2006. Dicho Decreto obliga a todo vehículo motorizado a circular por rutas interurbanas, incluso cuando estas rutas atraviesan zonas urbanas, con sus luces de circulación diurnas encendidas; en caso de no contar con dichas luces, deberán hacerlo



Foja: 1

con sus luces bajas encendidas, aún a plena luminosidad solar. Señala que las razones para tal obligación se explican en el mismo Decreto, como necesarias para prevenir colisiones, las que copia por su alto interés a efectos de este juicio: “*Considerando: 1. Que un vehículo con luces bajas encendidas presenta mayor nivel de contraste con el entorno, favoreciendo a otros conductores y peatones que se percaten de su presencia, independiente de las condiciones climáticas y de luminosidad. 2. Que según el Instituto Holandés de Investigación para la Seguridad Vial, en los países en que se ha implementado el uso de luces diurnas, se han evitado 20% de heridos y 25% de muertes, producto de colisiones diurnas. Además, un meta estudio que recoge 41 estudios previos sobre el tema, indica que se han reducido las colisiones diurnas entre un 8% y 15%; y que los atropellos a peatones y ciclistas disminuyeron en un 15% y 10%, respectivamente. 3. Que basándose en los estudios antes referidos, la Organización Mundial de la Salud, en el Informe Mundial sobre la Prevención de los Traumatismos Causados por el Tránsito (2004), recomienda que los países consideren la posibilidad de exigir la utilización de luces diurnas no sólo en vehículos de 2 ruedas. 4. Que en Chile, no obstante el 13% de los accidentes de tránsito se producen en las vías no urbanas, éstos concentran el 57% del total de fallecidos*”.

Agrega como otros hechos no controvertidos los siguientes: 1.- Que el señor Cristián Gallardo Gómez no fue parte en el proceso penal y, por consecuencia, ni la sentencia penal RIT 601-2015 ni ninguna otra sentencia penal le ha asignado autoría ni responsabilidad concomitante, concurrente ni conjunta con el señor Javier Carrasco Leiva en los cuasidelitos por los cuales este último fue condenado como único autor; 2.- Que el único condenado como autor de cuatro cuasidelitos por sentencia ejecutoriada en los autos criminales RIT 601-2015 por el Tribunal de Garantía de Lebu es el señor Javier Carrasco Leiva; 3.- Que es condición de procedencia de la acción indemnizatoria el que se establezca previamente que el señor Gallardo ha cometido o concurrido a cometer, los mismos cuatro delitos culposos de homicidio por los cuales fue condenado el señor Carrasco; 4.- Que el Tribunal en lo civil no tiene atribución alguna para conocer ni juzgar delitos ni cuasidelitos penales. Tampoco la tiene para ampliar, modificar o complementar lo resuelto por sentencia ejecutoriada en los autos criminales RIT 601-2015 por el Tribunal de Garantía de Lebu; 5.- Que el supuesto sobre el cual descansa la demanda de autos –la responsabilidad de su representado en la comisión de cuasidelitos de homicidio- no es materia que sea de la competencia del Tribunal en lo civil; 6.- Que el señor Cristián Gallardo Gómez no tuvo ninguna participación punible en la comisión de los cuatro cuasidelitos de homicidio. Y por esa razón es que no dedujo acusación en su contra. Es más, requirió su participación en el juicio penal como testigo de la acusación; 7.- Que ninguno de los actuales demandantes se opuso, en su momento y en modo alguno, en sede penal, a la exoneración de responsabilidad del señor Gallardo; 8.- También ha quedado como un hecho no controvertido que en el día y hora de los hechos que señala la demanda, en circunstancias que el señor Gallardo conducía el bus



Foja: 1

por su pista de circulación, en el sentido del tránsito y a velocidad reglamentaria, esa circulación le fue cortada u obstruida sorpresivamente por el vehículo del señor Barto, quien traspasó el eje central de la calzada y ocupó la pista de circulación del bus que guiaba el señor Gallardo, impactándolo de frente, totalmente dentro de la pista de circulación del bus; 9.- Que el motivo por el cual el señor Barto traspasó el eje de la calzada e impactó al bus, es consecuencia de la acción imprudente y culpable de un tercero, don Javier Andrés Carrasco Leiva, tal como lo relata la demanda y como quedó establecido en la sentencia a firme dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Lebu, en causa RIT 601-2015, por la cual se condenó al señor Carrasco a una pena penal como único autor de los cuatro delitos de homicidio de la víctimas fatales de la colisión; 10.- Que antes y al momento de ser sorpresivamente impactado por el vehículo del señor Barto, el señor Cristián Gallardo ejecutaba una actividad lícita, como lo es el conducir un bus de transporte interprovincial de pasajeros, lo que además hacía conforme a reglamentos y leyes del tráfico automotor, con prudencia, por su pista, en el sentido del tránsito y a velocidad reglamentaria; 11.- Que la prueba testimonial y la pericial ejecutada por la SIAT de Carabineros de Chile, agregada en autos RIT 601-2015, demostraron con nitidez el obrar reglamentario del señor Cristian Gallardo y las maniobras evasivas que fue obligado a realizar, excluyéndolo de toda injerencia causal de la actividad o conducta en la producción de los resultados de muerte que se pide indemnizar; 12.- Que no hay conducta antijurídica por parte de don Cristián Gallardo, porque su actuar antes, durante y después de la colisión en nada contradijo el ordenamiento jurídico ni tampoco configuró la comisión de alguna conducta prohibida o sancionada en la ley; 13.- Tampoco fue controvertido que al declarar el señor Gallardo en el proceso penal que “Piensa que no reaccionó bien, (el Sr. Barto) que con los nervios aceleró, en vez de frenar, son reacciones de segundos”, el señor Gallardo no hablaba de sí mismo, sino que explicaba las maniobras que el señor Barto hizo en los instantes previos a estrellarse contra su bus; 14.- Que el que embistió de frente al bus fue el vehículo del Sr. Barto; 15.- Que quien cruzó sorpresivamente el eje central de la calzada invadiendo la pista del bus, fue el móvil del Sr. Barto; 16.- Que el que sufrió la colisión por roce del tercer automóvil fue el señor Barto; 17.- Que el que perdió el control de su vehículo por el roce fue el señor Barto; 18.- Que el que hizo zigzagueos antes embestir al bus fue el vehículo del señor Barto; 19.- También ha quedado como un hecho no controvertido, que enfrentado a la emergencia causada por el Sr. Carrasco, el Sr. Barto tampoco pudo controlar su vehículo, evitar la colisión por roce ni el zigzagueo de su vehículo, ni disminuir su velocidad hasta detenerse, ni evitar cruzar el eje central de la calzada, ni obstruir la marcha del bus ni evitar colisionar este móvil; 20.- Que no existe relación causal entre la conducta del Cristian Gallardo y el resultado producido; 21.- Que en la cadena de hechos, la causa eficiente o el acontecimiento preponderante en el resultado de muertes y daño fue la maniobra imprudente de adelantamiento de Carrasco; 22.- Que los vehículos de Carrasco y Barto fueron los que chocaron entre sí,



Foja: 1

con culpabilidad de uno o ambos conductores y que, como consecuencia de esa colisión, el vehículo del señor Barto fue lanzado a la pista contraria, donde impactó a un tercer vehículo, el bus guiado por el señor Gallardo; 23.- Que el señor Gallardo transitaba por su pista, a velocidad reglamentaria, cuando sorpresivamente se interpuso en su camino el vehículo del señor Barto, que venía desplazándose fuera de control a causa de la colisión por roce recién provocada por el obrar imprudente del señor Carrasco; 24.- Tampoco fue controvertido que en los hechos del juicio no hay unidad del hecho dañoso ni la concurrencia de autores comisión o conjunta de la infracción, por lo que no se puede hacer extensiva a su parte las indemnizaciones que deba pagar el Sr. Carrasco y 25.- También ha quedado como un hecho no controvertido que don Enoc Barto se expuso imprudentemente al daño, dado que al momento de la colisión él conducía su vehículo con las luces apagadas, de noche, a las 21:20 horas, aproximadamente y habiendo, además, niebla que dificultaba la visibilidad.

A folio 40 el abogado Mario Münzenmayer Bellolio, por la demandada Empresa de Transportes Rurales Limitada, evacúa la dúplica, señalando que reitera los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en su contestación, los que el demandante no pudo desvirtuar en su réplica, en que la parte demandante insiste en remarcar una supuesta similitud de las defensas de la propietaria del bus a la que representa, con la del chofer señor Gallardo, tal cuestión es de suyo totalmente irrelevante, desde que el artículo 1520 del Código Civil autoriza expresamente a su parte, en cuanto eventual deudor solidario demandado, para “oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la excepción, y además, todas las personales suyas.”

En lo tocante a la supuesta insuficiencia de la fundamentación de la excepción de prescripción extintiva de la acción, señala que han sostenido con toda precisión que el hecho dañoso acaeció el día 8 de octubre de 2013; que la demanda de autos le fue notificada a su parte el día 23 de octubre de 2017 y que el artículo 2332 del Código Civil dispone que prescriben en cuatro años, desde la perpetración del acto, las acciones indemnizatorias civiles derivadas de delitos o cuasidelitos y demás contenidas en el Título XXXV del Libro IV del C. Civil. Es decir, se señaló el plazo legal, la fecha en que principió a correr la prescripción de 4 años y la fecha en que se notificó, extemporáneamente, la demanda.

Respecto de la falta de legitimación activa de los demandantes, que los demandantes niegan, lo cierto es que el texto del art. 2315, en relación con los artículos 952 inc.1º y 989, todos del Código Civil, despejan toda duda: sólo son titulares de la acción de indemnización el que ha sufrido el daño producido por el delito o cuasi delitos, o sus herederos. Contrariamente a lo sostenido en la réplica, la sola existencia de un vínculo familiar no es suficiente para presumir daño moral o aflicción por la pérdida de un pariente. La prensa de cada día pone en la perspectiva de un creciente deterioro de las relaciones familiares, siendo ya común la violencia intrafamiliar, los femicidios,



Foja: 1

homicidios, lesiones y todo tipo de agresiones físicas y morales entre personas ligadas por algún vínculo de parentesco.

En cuanto a la falta de competencia del Tribunal para conocer de un ilícito penal, indica que ya se ha explicado suficientemente en la contestación de la demanda que habiéndose imputado a Cristián Gallardo Gómez la comisión de cuatro cuasidelitos de homicidios penales, es necesario que tal circunstancia sea acreditada en estos autos, pero atendido que este tribunal carece de competencia para conocer y juzgar asuntos criminales, quien debe declarar la responsabilidad penal es el Tribunal Penal competente, lo que viene sosteniendo tiene solución de texto expreso y desde muy antiguo. El artículo 167 del Código de Procedimiento Civil dispone: “Cuando la existencia de un delito haya de ser el fundamento preciso de una sentencia civil o tenga en ella influencia notoria, podrán los tribunales suspender el pronunciamiento de ésta hasta la terminación del proceso criminal, si en éste se ha deducido acusación o formulado requerimiento...” En contrapartida, el artículo 17 del Código Procesal Penal dispone que en los casos que se requiera para el juzgamiento de asuntos criminales la previa resolución de un asunto civil, se debe suspender el procedimiento criminal hasta que dicha cuestión se resolviera por sentencia firme dictada por un tribunal que no ejerciera jurisdicción en lo penal. Para ello, se mandata al ministerio público para que promueva la causa civil previa e intervenga en ella hasta su término. Lo que viene diciendo confirma que el principio jurídico es que ningún tribunal debe avocarse a conocer y fallar en materias que no son de su competencia. El juez penal no puede resolver cuestiones civiles, ni el juez civil puede resolver cuestiones penales, como en el presente juicio, en que se pretende llevar a declarar que el señor Gallardo es autor de un cuasidelito penal con concurrencia con otro que ya fue condenado en sede penal. En la réplica, los demandantes han pretendido soslayar su error, cambiando el fundamento de su demanda, así en el apartado 2 de la página 5 del escrito de réplica, se sostiene ahora que la responsabilidad civil de Gallardo “... no emana de un delito o cuasidelito penal, sino del daño ocasionado (...) la tipificación nada añade a la responsabilidad civil”, pero esta nueva alegación debe ser desestimada, ya que estando contestada la demanda no es posible modificarla.

Por su parte, el demandado Javier Andrés Carrasco Leiva **no evacuó el traslado de la réplica** en la oportunidad legal.

A folio 53 rola acta de audiencia de conciliación, la que no se produce atendido la inasistencia de los demandados.

A folio 55 rola resolución que recibe la causa a prueba.

A folio 101 se cita a las partes para oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para acreditar sus pretensiones la parte demandante acompañó la siguiente prueba:

I.- Documental



Foja: 1

A folio 1

1.- Certificado de matrimonio entre Segundo Ajenor Zúñiga Burgos y Eunice del Carmen Yepsen Monsálvez.

2.- Certificados de nacimiento de Marjorie Vanessa, Nitza Pamela, Alejandro Ajenor, Fabián Ignacio y Sofía Lorena Zúñiga Yepsen.

3.- Certificado de matrimonio entre Enoc Jeremías Barto Rojas y Sofía Lorena Zúñiga Yepsen.

4.- Certificados de nacimiento de Benjamín Enoc y Pablo Andrés Barto Zúñiga.

5.- Certificados de defunción de Enoc Jeremías Barto Rojas, Sofía Lorena Zúñiga Yepsen y Benjamín Enoc y Pablo Andrés Barto Zúñiga.

6.- Certificados de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación del automóvil Toyota Corolla placa patente YA.1738-1 y del Bus Mercedes Benz placa patente FWVR.12-6.

A folio 68

7.- Metapericia del Informe Técnico Pericial N° 172-A-2013 de la SIAT de Concepción, dependiente de la Prefectura N° 18 de Carabineros de Concepción, en Investigación RUC 1300386335-9 de la Fiscalía de Lebu, elaborado por el Ex Oficial I.A.T (Investigador de accidentes en el tránsito) y Ex Jefe de la Siat de Carabineros Concepción, el Mayor de Carabineros (R) Sergio Jorge Muñoz Vásquez.

8.- Informe técnico del accidente de tránsito analizado N° 14-A-219, de fecha 31 de mayo de 2019, elaborado por el Capitán de Carabineros (R) Eduardo Perales Martínez, que contiene cuatro planos elaborados por don Ramón Arcides Ruay Oyarzo, planimetrista, Sub-Oficial de Carabineros (R) y cuatro fotografías tomadas en el sitio del suceso momentos luego del accidente.

A folio 69

9.- Copia de la carpeta de investigación llevada por Fiscalía de Lebu RUC N° 1300386335-9, por cuasidelito de homicidio.

10.- Copia de la causa RIT 601-2015 del Juzgado de Garantía de Lebu.

A folio 84

11.- Currículum Vitae de don Sergio Muñoz Vasquez, Mayor de Carabineros (R).

12.- Título de Investigador de Accidentes en el Tránsito de don Eduardo Perales Martínez.

13.- Oficio sobre minuta de archivo, dirigido al Fiscal Nacional Económico, remitido por el Jefe de División de investigaciones, sobre Denuncia contra Buses Bío Bío y otras, por posible abuso de posición dominante e infracción al artículo 4 del DL 211 de 1973, que ratifica que Buses Bío Bío se encuentra controlada por el Grupo TUR-BUS.

II.- Testimonial



Foja: 1

A folio 71 y 82 rinde prueba testimonial, conforme a la lista acompañada a folio 66, consistente en la declaración de los siguientes testigos, quienes deponen previamente juramentados e interrogados por separado al tenor de los puntos de prueba de folio 55:

1.- **EDUARDO PERALES MARTÍNEZ**, cédula nacional de identidad número 9.267.862-8:

Al punto número uno indica que efectivamente el hecho del ilícito aconteció un día martes 8 de octubre del año 2013, donde siendo las 21:20 horas aproximadamente, en el sector Toco-Toco, aproximado al km. 119 del hito, próximo a la comuna de Los Álamos, ocurrió un accidente de tránsito múltiple con la participación de más de dos vehículos; dicho accidente ocurrió cuando tanto el participante de apellido Carrasco que conducía un vehículo marca Toyota, se dirigía por el costado derecho de la ruta 160 en dirección al sur poniente, siendo antecedido por un vehículo conducido por la misma ruta y dirección de un señor de apellido Milcheo (antecedentes obtenidos en las fojas que rolan en el expediente de sede penal, el cual fue la base de estudio); además lo sucedía al vehículo el señor Carrasco, por la misma ruta y dirección, el señor Gallardo, conductor de un bus de dos pisos de la empresa Tur Bus, que se direccionaba en dirección Lebu con destino a Santiago con pasajeros en su interior, fue entonces que el participante Milcheo (que pese que existen sus antecedentes en su expediente sede penal no fue tomado en cuenta en la investigación efectuada por la Fiscalía de Lebu), efectuó una maniobra indebida y antirreglamentaria de adelantamiento a un vehículo no identificado, el cual fue tomado en consideración en la línea investigativa de la Fiscalía sin lograr su identificación, no obstante si se registró su descriptiva de su desplazamiento en la pericia realizada por el equipo investigador de la Siat de Carabineros, fue en esas circunstancias que el conductor Milcheo que designa en su informe de análisis del accidente y que adjuntó para ser presentado en sede civil, fue el primer conductor que inició una maniobra de adelantamiento y que luego desistiera de esta al percatarse de la presencia y proximidad del vehículo signado en su informe como número 3 (conductor Enoc Barto), que se dirigía en sentido contrario de todos estos participantes que más arriba hizo mención, o sea, conducía por costado derecho de la calzada nororiente en dirección a Lebu; al efectuar esta maniobra el señor Milcheo y desistir de esta, no se percató de que atrás de él, vehículo que lo sucedía en el siguiente orden: N°1 Carrasco, N°2 Gallardo (conductor del bus de transporte Tur Bus), también estos conductores consecutivos y secuencial efectuaban una maniobra de adelantamiento al vehículo no identificado ya antes mencionado y también ambos vehículos se vieron en la obligación de desistir su maniobra antirreglamentaria e indebida, toda vez que ya tanto el vehículo que designa con el N° 1 y 2 además llevaban su visión obstruida por la maniobra de adelantamiento que partió iniciando y que no desarrolló la persona de Milcheo, esto produjo en maniobras tardías y de emergencia, intentar recuperar y habilitarse en costado derecho que llevaban en sus desplazamientos, por lo que pese a que el señor Carrasco realizó una maniobra de desistimiento y recuperación de su vía no logró evitar colisionar de roce (de



Foja: 1

acuerdo a los daños y peritaje técnico mecánico que demuestran, tanto en fotografía como por descripción del oficial de la Siat, se debió a una colisión de bajo impacto), lo que pudo, tomando en consideración las masa y velocidades similares que llevaban tanto Carrasco como el señor Barto, que ambos tuvieran una desestabilización sin llegar a una pérdida de control y dominio de los vehículos que ambos conducían. Posteriormente el bus conducido por el señor Gallardo en atención que en su dominio de conducción era un bus de dos pisos, el desistimiento de la maniobra de adelantamiento que llevaba linealmente con el vehículo del señor Carrasco tuvo que haber sido paulatina y retardada de lo contrario hubiese producido un volcamiento de su máquina, por lo que mientras se desplazaba con parte de su estructura, pisando el eje central de la calzada y por ende invadiendo la pista respectiva que llevaba Enoc Barto, no pudo evitar colisionar con la parte frontal izquierda, interviniendo además su parte fronto-lateral izquierda con la parte frontal del vehículo de Enoc Barto, mientras ocupaba la calzada que para el conductor de Tur Bus ya era la pista en sentido contrario. Tal fue la magnitud del impacto, habida consideración que estos dos últimos vehículos que interactuaron, que lo arrastró adosado a la estructura frontal del bus hasta cuando el conductor del citado bus recién aplicare los frenos, acción que hizo desadozar la carrocería del vehículo de Barto, proyectándolo diagonalmente hacia la salida del camino del costado derecho de la calzada que ocupaba y le correspondía a este último. Para luego el citado bus, solo en desaceleración, continuó maniobrando para terminar de habilitarse su pista y que luego lo hiciera salirse del camino a la derecha del costado de su vía. Después de estas interacciones y desplazamientos, comenzaron a ocurrir acciones y omisiones en el lugar de los hechos de acuerdo a lo siguiente: los primeros en constituirse en el sitio del suceso fueron los carabineros de Los Álamos a cargo de un sargento primero de nombre Floridor, quien por algún tipo de razón no aisló, no fijó ni tampoco cuidó el sitio del suceso, por cuanto sí permitió que el cuerpo de bomberos de Los Álamos contaminaran el sitio de ocurridos los hechos, lavando la calzada y barriendo todo tipo de indicio que en definitiva (sitio del suceso) le haría descifrar al oficial investigador de la SIAT, que llegó al lugar después de cuatro horas, poder arribar a la verdad de cómo ocurrieron, los eslabones y episodios de una marcha analítica lógica, tomando en consideración daños, calzada e indicios que provocaron en definitiva incurrir en un error extremo al oficial jefe del equipo SIAT, de que sus conclusiones en su informe final fueran de tono aberrante y que en su análisis el testigo hace presente, toda vez que su interpretación del accidente se alejó del espíritu investigativo de la especialidad IAT (investigadores de accidentes de tránsito) y fue inserto en el informe como un accidente erróneamente mal encasillado. Hace presente que para este encasillamiento se ayudaron de elementos no relevantes, como lo es el tema que el vehículo de Barto conducía sin luces, toda vez que se utilizó por ambos conductores participantes y responsables este argumento para evadir la responsabilidad que ambos tenían muy claro. Señala que para su informe de análisis del accidente se contactó con el planimetrista de la SIAT, quien firmó el plano que fue



Foja: 1

materia en sede penal, por cuanto en su análisis y de acuerdo a las medidas que lleva este plano, no dictaba relación lógica de como ocurrió el accidente, fue entonces que este sub oficial mayor de carabineros Ramón Ruay, efectuó un plano para su análisis con las medidas y antecedentes que tenía el levantamiento planimétrico que el firmó en sede penal, evidenciando de manera inmediata que no podía calzar con la dinámica general del accidente investigado por la SIAT, por el contrario con la dinámica general replanteada que hizo en su informe de análisis, la marcha analítica calzaba en razón lógica, situación por la cual dichos medios de prueba los adjunta a su análisis en una vista general y dos vistas de perfiles que demuestran las acciones que más arriba hace mención. Hace presente con todo lo anterior expuesto, que existieron dos responsables en el accidente (Carrasco y Gallardo), Carrasco porque efectuó una maniobra de adelantamiento indebido y antirreglamentario, indebido porque lo hizo sin poseer tiempo ni espacio para ello y antirreglamentario, porque lo hacía con su visual obstruida, sin poder evitar colisionar de roce; y Gallardo, por efectuar una maniobra de adelantamiento indebido y antirreglamentario, pero además este último fue quien terminó aniquilando toda una familia.

Interrogado por la parte demandante sobre qué conocimientos técnicos posee y que cargo ocupa o ha ocupado, como para aseverar todo lo que acaba de declarar, responde que es oficial de carabineros en situación de retiro, con título de especialidad experto en investigador de accidentes de tránsito; en su especialidad son muy pocos los escenarios en el país que no hayan sido sitios de suceso investigados por él, con esto dice que se ha desempeñado de Arica a Punta Arenas, especialmente en el alma mater de la especialidad con sede en Santiago, en el cual se desempeñó por más de cinco años como "OCRIT" (oficial corrector de informes técnicos), donde tenía que aceptar o rechazar las dinámicas descifradas por los oficiales de la SIAT de Santiago en sus investigaciones de accidentes en el tránsito.

Interrogado sobre si entre todos los lugares en que se desempeñó, también está Lebu, indica que sí, que en el año 1997 como una nueva modalidad y por la gran cantidad de accidentes en la zona que ocurrían, tuvo que agregarse a la prefectura de carabineros de Lebu. En cuanto al tipo de vías, vehículos y perfiles de los participantes (conductores, peatones o pasajeros) eran de materia conocida para él.

Exhibido el denominado informe técnico del accidente de tránsito analizado N°12-A-219, señala que corresponde al análisis del accidente materia en cuestión y lo hace suyo en su forma y fondo, y agrega que en este se adjuntan los levantamiento planimétricos, planos tanto del informe de la Siat que hizo el sub oficial mayor Ruay, como los que confeccionó para el mencionado informe de análisis del accidente del tránsito en cuestión, ratificándolo.

Contrainterrogado para que diga si lo que ha dicho son hechos que el presencié o son disquisiciones o posibilidades que él cree pueden ser otras opciones, responde que este es un hecho que no presencié, pero su informe de análisis del accidente de tránsito



Foja: 1

se fundamenta sobre un estudio acucioso de los antecedentes que existen en la carpeta investigativa de la Fiscalía, en su oportunidad cuando investigó el caso, nada de su informe de análisis tiene una fuente que no sea el mismo expediente en sede penal.

Contrainterrogado sobre cuál era el recorrido del bus, desde dónde y hasta dónde se desplazaba, indica que de acuerdo a los antecedentes tomó conocimiento que se desplazaba desde Lebu hasta la ciudad de Santiago, de no ser así simplemente es porque no tiene en su análisis relevancia alguna, tanto el origen como el destino que llevaba el Tur Bus con pasajeros.

Contrainterrogado para que diga si Santiago esta la norte o al sur de Lebu, responde que Santiago esta al norte de Lebu, pero en la ruta 160 por configuración vial marca el nororiente Santiago y sur poniente a Lebu.

Contrainterrogado para que diga si se cursan infracciones de tránsito a los vehículos que no ocupan sus luces encendidas en la carretera, responde que se cursan infracciones por transitar sin luces e inclusive se les saca de la circulación si no poseen, ese es el procedimiento que se adopta por carabineros de Chile y sobretodo ese procedimiento lo adopta la subcomisaría de Laraquete que tiene un control severo respecto de los vehículos que transitan y que en este caso tuvo que haberse enfrentado la persona de Enoc Barto, que en paz descanse.

Contrainterrogado para que diga dada su especialidad con título en accidentes de tránsito, si andar con las luces encendidas en la carretera evita accidentes, responde que no existe causa basal alguna en el historial de accidentes de tránsito, que sea conducir un vehículo sin sus luces cuando corresponde. Si el conducir vehículos con luces estando obligado a hacerlo y no lo hace, el transitar en esta condición solamente puede ser una infracción accesoria, como curiosamente aceptó, como contestó, en el informe de la Siat de carabineros.

Al punto número tres refiere que sí, es completamente efectivo y se remite a lo antes ya declarado.

Al punto número ocho señala que no es efectivo, por cuanto si hubiese sido verdad tal condición, aun así no tiene relevancia con la causa basal del accidente, a viva consideración que las luces bajas y altas de los demás participantes los habilita para tener una visibilidad de 60 y 110 metros, tiempo suficiente que puede hacer crear una reacción para evitar accidentes. Preguntado para que precise a que se refiere cuando dice "si hubiere sido verdad tal condición", indica porque esa condición nunca fue probada, toda vez que la misma Siat investigativa no estableció algún tipo de desperfecto electromecánico que pudiera afirmar el problema de luces que tenía el vehículo de Enoc Barto y los expedientes que rolan en sede penal tampoco fue probado. Por lo que más arriba narra y descarta que este fue un argumento para evadir responsabilidades, por ambos participantes que compartieron la responsabilidad.



Foja: 1

Contrainterrogado para que diga si él presenció que las luces del vehículo del señor Barto funcionaban correctamente a la hora del accidente, responde que no lo presenció.

Al punto número nueve expresa que se remite a lo anteriormente expuesto y agrega que el señor Carrasco cometió la misma infracción de tránsito que originó la causa basal del accidente como el conductor del bus, señor Gallardo; la diferencia está en que fue el conductor del bus Tur Bus (Gallardo) quien terminó de eliminar a toda una familia.

Contrainterrogado para que diga si el señor Cristian Gallardo ha sido investigado en sede penal alguna vez por estos hechos, responde que lamentablemente este señor Gallardo no tuvo calidad de imputado en sede penal por la contaminación de los hechos antes narrados y cosas extrañas, que en materia de investigación no se tomaron en cuenta.

2.- NARCISO ADRIAN SALINAS REINOSO, cédula nacional de identidad número 9.780.667-5:

Al punto número uno indica que se subieron con su señora y su bebe al bus Tur Bus, era el de las 09:30, eran los tres como pasajeros que iban arriba del bus viajando a Santiago ese día y en transcurso del viaje, no hacía más de 10 minutos que llevaban viajando calcula, su señora se paró a darle agua al bebe de una bebida que llevaban y ese lapso sintieron que el bus hizo un movimiento muy brusco y sintieron que el bus chocó con algo y a la vez, después del choque, una frenada que van a dar al costado del camino, al lado derecho y se apagó completa la luz del bus, quedó casi volcado en el camino y ahí su señora, porque el bebé se puso a llorar, salió disparada hacia adelante, hacia donde estaba el chofer, ella estaba parada en el pasillo dándole agua al bebe, iban en el segundo piso del bus. Ella volvió al asiento que le correspondía porque el bebé lloraba y ahí empezó el movimiento de bajarse del bus, alumbraron al bebe para ver si se había pegado, revisaron su carita y ahí se dieron cuenta que el bus había chocado con un auto. Preguntado sobre a qué se refiere cuando declara "que el bus hizo un movimiento muy brusco", responde que el movimiento consistió que el bus salió de la pista, porque para hacer ese movimiento es porque se salió de la pista y volvió muy rápido al lugar que tenía que ir. Hacia la izquierda salió el bus y volvió a su lugar, hacia la derecha y ahí sintieron que impactó con algo y después de eso frenó el bus.

Contrainterrogado para que diga si él compró el pasaje para viajar, como era el pasaje, era un cartón, era un papel, responde que sí, que compró pasaje, era un boleto común y corriente que da el Tur Bus, era de papel. Preguntado sobre en qué asiento iba del bus, responde que no recuerda bien, porque ya pasaron varios años, iban en la tercera fila, de atrás para adelante por lo menos. Preguntado a qué hora fue el choque y si estaba oscuro o estaba claro, responde que estaba oscuro, que el bus salió de noche.

3.- VERÓNICA DE ROSARIO ORDENES MORALES, cédula nacional de identidad número 10.106.207-4:



Foja: 1

Al punto número uno indica que lo que puede decir lo que vivió en ese momento, en ese momento estaba atendiendo a su hijo en el bus Tur Bus, porque iba a Santiago desde Lebu, iban con su marido y su hijo, porque tenía que tomar vuelo hacia Arica, vuelo que perdió por el motivo del accidente; iba pendiente de su hijo y en ese momento le cedió su asiento a su hijo, se paró y en ese momento como que el bus hizo un movimiento, como que adelantó, no sabe y ella se fue encima de su hijo, porque iban sentados al lado izquierdo del bus e hizo un movimiento y de repente como que chocaron y el bus frenó y fue todo rápido porque sintieron como un golpe, porque cuando frenó, el bus frenó brusco y se fue para adelante y sintió que su hijo lloraba.

Repreguntada para que diga que fue primero si el choque o la frenada del bus, responde que el choque, porque cuando frenó ella se fue para adelante. Preguntada para que precise a que se refiere cuando dice que el bus hizo un movimiento, como que adelantó, si el movimiento fue a qué lado, responde que el movimiento fue hacia el lado izquierdo, ella iba sentada a la orilla y le cedió el asiento a su hijo, ella quedó en el pasillo y cuando el bus hizo como que iba a adelantar, se fue encima de su hijo. Interrogada para que precise cómo se llama su marido y su hijo, responde que su hijo se llama Agustín y tenía un año de edad y su marido se llama Narciso. Preguntada para que diga si a consecuencia del accidente, ella, su marido o su hijo resultaron con lesiones y si los llevaron al hospital de Lebu a constatar lesiones, responde que sí, su hijo recibió un golpe en la sien y a consecuencia de eso a su hijo se le asustó (sic) una venita, quedó como afuera hasta el día de hoy y a ella la llevaron porque sufre de discopatía lumbar y con el golpe que recibió estuvo una semana en cama y su marido también tuvo un golpe menor. Preguntada para diga si carabineros le tomó declaración o a su marido, responde que no, nada.

Contrainterrogada para que diga si ella compró el pasaje para viajar, como era el pasaje, era un cartón o un papel, responde que lo compró su esposo y que era un papel. Contrainterrogada para que diga en que asiento iba del bus, responde que ya llevan 6 años, casi 7 y no es posible recordarse. En cuanto a la hora en fue el choque y si estaba oscuro o estaba claro, responde que estaba oscuro, salieron en el bus de las 9 de la noche. Sobre por qué declaró en el juicio penal, responde que la verdad de las cosas a este caballero, el abuelito de los niños ella no lo conoce, él la contactó y parece que él averiguó que iban en el bus, no tiene idea cómo se contactó con ellos, jamás lo había visto.

4.- CAROLINA BEATRIZ POLONI LAGOS, cédula nacional de identidad número 13.601.809-4:

Al punto número dos señala que no hay un monto que se pueda definir para la pérdida grande que ellos tuvieron, está hablando de cuatro vidas y sería incalculable definir algo como un monto. En cuanto a los perjuicios, bueno todo lo que ellos tuvieron como cambio de vida, emocional y afectivo. Conoce a la familia de don Agenor, específicamente por su hija mayor Sofía, ella fue su apoderada, por eso la conoce junto



Foja: 1

con su esposo y sus hijos, ellos tuvieron un accidente, en donde los cuatro perdieron la vida, esto en la localidad, cercanía de Pehuén, ellos venían camino a su casa en Santa Rosa. En este accidente estuvo involucrado un vehículo menor y un bus de Tur Bus; ella se entera de lo sucedido, le avisa un familiar de ellos de lo ocurrido, por ser la educadora, directora del establecimiento, se entera en la misma noche; le informan que había ocurrido este accidente y que había personas fallecidas, pero no sabían la totalidad de personas y se comunicó con parte de la familia para conocer más detalles y dar el pésame también a la familia. Esa noche viajó de Lebu a Santa Rosa, a la casa de ellos y fue sumamente doloroso el ver todo lo que estaba pasando; no vio los vehículos, fue a la casa en Santa Rosa, se refiere a lo que estaba ocurriendo y el estado que estaba la familia. Preguntada para que diga si lo que ha referido respecto de la familia de don Agenor persiste hasta el día de hoy, responde que sí, persiste hasta el día de hoy el dolor de la pérdida de su hija, yerno y dos nietos, Benjamín de 5 años y Pablo de 1 año; conoce a la familia, ya que trabaja en Santa Rosa, ellos viven allá, es una localidad pequeña, todos se conocen. Ellos han estado con depresión, don Agenor y doña Eunice, los padres de Sofía y abuelos de los niños, por eso su cambio, su forma de ser es distinta, ellos eran alegres y ahora se ven depresivos. Preguntada para que diga a qué se refiere cuando dice que Sofía fue apoderada suya, de quién, responde que es la directora del Jardín Infantil Santa Rosa de fundación Integra y ellos, Sofía y Enoc matricularon a su hijo Benjamín en el jardín; ellos siempre fueron buenos apoderados, siempre estaban presentes en todas las actividades que se realizaban, muy preocupados de su hijo y así conoció al resto de la familia, ya que igual trabajan con el resto de la comunidad. Preguntada para que diga si los daños a que se ha referido afectaron a todos los actores (o demandantes) o solo a alguno de ellos y en su caso a cuáles, responde que sufrió toda la familia a consecuencia de la perdida de sus familiares, producto del accidente; esto ocurrió el 08 de octubre de 2013 y persiste hasta la fecha; sabe que han estado siendo atendidos por psicólogos, médicos, no maneja el monto de cuanto podrían haber gastado. La señora Eunice es manipuladora de alimentos, trabajaba en la escuela de Santa Rosa y a consecuencia de esto, ella tuvo que dejar su trabajo por el dolor de la pérdida de su hija, yerno y sus nietos.

5.- LUCIA MARISOL FERNANDEZ URRÁ, cédula nacional de identidad número 12.924.669-3:

Al punto número dos expresa que conoce a don Agenor Zúñiga, durante años ha sido colega de él en el trabajo, en áreas aparte; conoció a don Agenor antes de la tragedia, la que ocurrió con su familia, ocurrió el accidente en el mes de octubre en Pehuén, sector rural, donde el comportamiento de él cambió del cielo a la tierra por la muerte de su hija Sofía, la muerte de sus nietos, Pablo, Enoc su yerno, a quien llamaba hijo y no recuerda el otro nombre del otro niño; don Agenor era un hombre robusto, fuerte, con capacidades de liderazgo dentro de su trabajo, un hombre alegre, participativo, siempre estaba ahí cuando se le necesitaba para todo; desde el día del



Foja: 1

accidente es como que devolvieron otra persona, fue muy impresionante ver el cambio que él tuvo después del accidente, él siempre estaba triste, no hablaba nada cuando volvió a trabajar después de 5 meses, muy delgado, una tristeza arraigada que cuando ellos pasaban, sentían su dolor; él arrastraba un sufrimiento muy grande, tenía crisis de pánico, depresión, ha tenido que ser asistido por psicólogo, era impresionante que él hablaba de eso todo el día, del accidente, no había otro tema para él. A él le quitaron su motor de vida, al fallecer su familia, la más allegada a él era ella y siempre llegaba allá con sus nietos cuando pedía permiso. Fue un cambio tremendo en su personalidad hasta el día de hoy, él habla dos palabras y lo que hace es llorar por el recuerdo de sus nietos, su hija, él se alimenta de las historias y recuerdos de ellos para mantenerse. Toda la familia ha pasado dificultades psicológicas, fue algo muy grande que nadie quedó ajeno en la comuna de este hecho. Todo esto para poder recuperarse psicológicamente tiene un costo, devolver la vida de su familia, eso no tiene precio, que le devuelvan lo que a él le quitaron, no existe dinero en el mundo que pueda hacer eso; le consta porque hasta el día de hoy ellos no se han podido recuperar física y psicológicamente, porque se ve su agotamiento, su dolor, la impotencia que tiene toda la familia. Todo esto le consta porque lo ha visto, él ha ido con su familia a su trabajo. Sobre don Agenor agrega que él ha trabajado muy poco después de ocurrido el accidente, es como ver a un niño aprender a caminar. No solamente él fue el afectado, sino también los que estaban a su alrededor por el tremendo sufrimiento causado a la familia.

6.- **SERGIO JORGE OMAR MUÑOZ VÁSQUEZ**, cédula nacional de identidad número 11.791.429-1:

Al punto número uno indica que en estudio realizado al informe 172 A - 2013, generado por la SIAT de Concepción, que dice relación con investigación de accidente de tránsito de tipo colisión, con resultado de muerte, ocurrido el día martes 08 de octubre de 2013, en donde el oficial investigador responsable de dicho trabajo pericial determina la causa basal sin incorporar antecedentes técnicos, donde no involucra responsabilidad directa al conductor del bus, don Cristian Gallardo, quien guiaba el móvil al momento del accidente, de propiedad de la demandada. Llama la atención, primeramente, que en el parte policial de la subcomisaria de Los Álamos, el mismo oficial investigador que se apersonó en el lugar con más de tres horas de haber ocurrido el siniestro, da una causa basal entregando responsabilidad total al conductor del automóvil, marca Hyundai, modelo Accent, color azul, que a consecuencia de este accidente resultó fallecido, al igual que su grupo familiar, compuesto por su cónyuge y dos menores de edad, de género masculino, de 4 y 1 año de edad, dando una supuesta conducción con desperfecto al sistema de alumbrado del móvil que conducía el fallecido, siendo este el motivo y causa de no ser visto en la vía por el vehículo conducido por don Javier Carrasco Leiva, y del conductor del bus don Cristian Gallardo, colisionando el fallecido con estos dos nombrados; para posteriormente en el informe pericial entregar una nueva causa basal, después de seis meses de haber investigado el accidente, es decir,



Foja: 1

el accidente ocurrió el 08 de octubre de 2013 y el informe pericial fue entregado y recepcionado en la Fiscalía Local de Lebu el día 15 de abril de 2014, en donde en esta nueva causa basal entrega la responsabilidad total del accidente al conductor de uno de los vehículos menores, marca Toyota, modelo Corolla, color blanco, conducido por don Javier Carrasco Leiva, que por una conducción no atenta a las condiciones del tránsito, a la vez que efectuaba una maniobra de adelantamiento indebida al hacerlo sin tener el tiempo ni espacio suficiente para ello, colisiona de roce en la pista de circulación del conductor fallecido, don Enoc Jeremías Barto Rojas, lo que provocó que luego colisionara por proyección al Bus. En razón a estas dos causas basales, distintas en su forma y fondo técnico investigativo de un accidente de tránsito, fue contactado por el Sr. Eduardo Perales, ex Oficial de la SIAT, con el objeto de realizar una meta pericia, por el motivo de la inconsistencia del informe SIAT 172 A - 2013, en la entrega de responsabilidad en la causa basal del accidente de tránsito, ocurrido en el kilómetro 199 de la ruta 160, sector Toco Toco, jurisdicción de la comuna de Los Álamos. Como resultado de este trabajo pericial, realizado por su persona, donde desde el año 2000 al año 2010 fue también jefe de la SIAT de Concepción y como dijo anteriormente, llamándole la atención el tiempo excesivo del proceso investigativo de este accidente, de seis meses, lo que conforme al reglamento interno de la SIAT no debe exceder los 40 días, es decir, el oficial investigador que tenía la responsabilidad de ese informe perdió totalmente la continuidad de esta investigación, como también omitió antecedentes relevantes en la investigación de este accidente, como un cuarto vehículo menor, conducido por don Luis Milcheo Jerez, móvil que antecedió a don Javier Carrasco y a don Cristian Gallardo, información que incluso se encontraba descrita en el parte policial del accidente de tránsito denunciado por la sub comisaria de Carabineros de Los Álamos, de fecha 08 de octubre de 2013, relevante antecedente que debió haber sido considerado en la dinámica, por parte del oficial investigador, que se apersonó en el lugar el día y hora de ocurrido. Conforme a estos antecedentes puede describir que la dinámica del accidente ocurrió de la siguiente forma: en el cual asigna primeramente responsabilidades en la causa basal del accidente, que a posterior va a mencionar, en el cual el hecho ilícito se traduce a que los conductores de los móviles 1 y 2 efectuaron una maniobra indebida de adelantamiento sin tener el tiempo y espacio suficiente, traspasando el eje de la calzada en forma consecutiva, ya que el móvil 1 antecedió al móvil 2, percatándose tardíamente de la presencia y circulación del móvil 3 que conducía en sentido contrario a estos, sumado a ello con su visual obstruida por la presencia y circulación del móvil 4, no considerado en el informe SIAT ya descrito, el que antecedió al móvil 1 y 2, y una no atención en la conducción por parte de estos últimos, como lo dice erróneamente en la causa basal del oficial investigador, ni tampoco deficiencia en el sistema de alumbrado del móvil 3, lo que no fue fundamentado o probado en todo el proceso investigativo, percatándose el conductor del móvil 4 Milcheo Jerez, de la presencia del móvil 3 en la vía, circulando en sentido contrario, el cual



Foja: 1

también lo hacía en maniobra de adelantamiento a un vehículo no identificado que circulaba a una menor velocidad que los vehículos 1, 2 y 4, y en la misma dirección o sentido, aprovechando estos últimos la configuración vial del lugar donde estos móviles circulaban en pendiente descendente, llamado también una configuración de tipo tobogán, efectuando una maniobra recuperativa de pista logrando retomar esta y ubicarse detrás del vehículo no identificado, en tanto el móvil 1 conducido por Carrasco y en maniobra de adelantamiento todavía en la pista izquierda, realiza acción recuperativa de su pista de circulación, es decir, costado derecho de la calzada, colisionando en la pista de circulación el móvil 3 conducido por Enoc Barto Rojas, de roce, con el tercio anterior del lateral izquierdo de su vehículo en el tercio posterior del lateral izquierdo del móvil 3. Este impacto leve, de poca o escasa fuerza, hace que el vehículo 3 continúe su desplazamiento por su pista de circulación, en proceso de desaceleración, trayecto en el cual fue colisionado con la parte frontal izquierda del Bus de la empresa Tur Bus, en la parte frontal izquierda y media del vehículo menor N° 3. Dicho impacto se ubica en la pista de circulación del móvil 3, toda vez que el bus al ver la presencia de este, en sentido contrario, se desplazaba en maniobra recuperativa de su pista de circulación, trasladando en proceso de arrastre al móvil 3 en la misma dirección que este llevaba, lo anterior por la diferencia de masa de los móviles y sus velocidades de desplazamiento. La zona de impacto de este último se determina debido a la trayectoria y tipo de desplazamiento que circulaba el bus, generándose huella de frenada y de arrastre por parte de este, que no son de tipo lineal primeramente, como tampoco que esta huella de frenada tiene su origen en el costado izquierdo de la calzada, en referencia al móvil 2 (el Bus de Tur Bus).

Preguntado para que diga qué conocimientos técnicos posee y qué cargos ocupa o ha ocupado, como para aseverar lo que acaba de declarar, responde que posee la especialidad de investigador de accidente en tránsito de Carabineros de Chile, trabajando 10 años en la SIAT de Concepción como oficial investigador y como oficial Jefe de la misma unidad. Actualmente se encuentra en situación de retiro de la institución, con 28 años de servicios, continuando su especialización en todo lo que tenga que ver con capacitaciones a conductores en su lugar de trabajo actual, como ingeniero de prevención de riesgos en la Intendencia Regional de Ñuble.

Se le exhibe el documento acompañado, signado con el nro. 1, "METAPERICIA DEL INFORME TÉCNICO PERICIAL NRO. 172 de la SIAT de Concepción", para que diga a qué corresponde, si lo reconoce y ratifica todo lo señalado en el mismo, indica que ese documento corresponde al informe realizado por su persona, el cual reconoce en todas sus partes, ratificando todo lo allí realizado, informe en el cual figura su firma estampada en este y sobre el cual se ha referido en su declaración.

Al punto número tres señala que efectivamente el referido hecho es imputable a los demandados, en forma compartida dicha responsabilidad del accidente a los conductores Javier Carrasco y don Cristian Gallardo, donde tuvo como consecuencia el



Foja: 1

fallecimiento de un grupo familiar y no así lo determinado por el oficial investigador de la SIAT que entrega dos causas basales en el proceso investigativo, primeramente en el parte policial en el cual se utiliza vocabulario técnico propio de los oficiales investigadores de Carabineros de Chile en accidentes de tránsito, lo que llama la atención, dando responsabilidad a don Enoc Barto Rojas y luego en el informe 172 A - 2013, entregando otra responsabilidad al conductor don Javier Carrasco, no entregando en este informe una responsabilidad compartida de la causa basal y consecuencias fatales al conductor del Bus don Cristian Gallardo. Dice responsabilidad compartida significando técnicamente que la generación del accidente de tránsito, el cual se está ventilando en esta causa civil, ambos conductores de los móviles 1 y 2, proporcionan independientemente una misma cantidad o porcentaje de omisiones, acciones y negligencias, en la generación de la causa basal del accidente, con lo cual se concluye en su informe pericial, denominado metapericia.

Al punto número ocho expresa que esta supuesta información o antecedente expuesto erróneamente por el oficial investigador, en primera instancia, al dar la causa basal estampada en el parte policial, que fue cambiada en el informe pericial 172 A - 2013 y que en ninguna de sus partes hace mención sobre este defecto del sistema de iluminación del móvil conducido por don Enoc Barto Rojas, mecánico de profesión, considerando este último punto que si hubiera tenido ese defecto este poseía los conocimientos necesarios para haber subsanado o solucionado dicha alteración luminosa del móvil que conducía, como también haber evitado la exposición a este tipo de evento, la circulación de esta forma. Es necesario mencionar que en el mismo informe pericial el mismo oficial investigador hace mención, en el rubro "de visual de los participantes", era BUENA ENTRE ELLOS, es decir, para los vehículos que circulaban en la misma dirección, y los que lo hacían en el sentido contrario. En la literatura investigativa de accidente en el tránsito obligatoria para todo oficial investigador de este tipo de evento, se menciona el siguiente caso "conductor que realiza maniobra de adelantamiento, traspasando el eje de la calzada, a un vehículo que circula en la misma dirección y a menor velocidad, que en ese desplazamiento en horario nocturno haciendo uso de su sistema de iluminación, colisiona en la pista izquierda con un vehículo tipo carretón tirado por un animal, móvil que no posee en su estructura un sistema de iluminación propio, la responsabilidad total del accidente se la daremos a este, o al vehículo que traspasa el eje de calzada obstruyéndole la pista de circulación al vehículo de tracción animal, considerando que las luces frontales en luz baja, el haz de luz se proyecta a 60 metros y a luz alta a 110 metros aproximadamente, sumando los haz de luz que proyecta el vehículo que es adelantado, es decir, el conductor del vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento posee buena visual y se puede percibir de la presencia de este vehículo menor sin luces, realizando en forma normal una maniobra recuperativa de pista; acción que no ocurrió en el accidente que se ventila en el presente juicio, debido a que el móvil 4, conducido por Milcheo Jerez obstruía la visual a los móviles 1 y 2, y que



Foja: 1

si el móvil 4 libremente y sin generar ningún accidente volvió a su pista, porque se percató de la presencia del móvil 3 conducido por la víctima, descartando con esto lo que dice el oficial investigador en su causa basal, de una conducción desatenta al momento del accidente, teniendo en consideración que conductores no realizan una maniobra de adelantamiento, no atendiendo la conducción total de su vehículo, teniendo en consideración el tipo de vía bidireccional en la cual se desplazaba.

Al punto número nueve indica que se remite en todas su partes a lo ya declarado al respecto en el punto tres, respecto a que la responsabilidad es totalmente compartida por los móviles 1 y 2.

7.- RAMÓN ARCIDES RUAY OYARZO, cédula nacional de identidad número 10.169.214-0:

Al punto número uno refiere que todos los hechos de esta causa le constan por la razón de que en la época de su ocurrencia se encontraba prestando servicios como planimetrista en la SIAT de Concepción y precisamente le tocó realizar ese informe técnico Nro. 172 A - 2013 en tal calidad, respecto de este accidente, para lo cual se hizo una reconstrucción de este, en base a la dinámica entregada por el oficial investigador, oficial que dice que un auto Toyota, móvil signado con el N° 1, transitando de Lebu a Los Álamos; su labor en este caso fue reconstruir lo que había pasado en terreno, de acuerdo a la dinámica que le entregó el oficial investigador, que dice que los móviles 1 es el Toyota, el 2 el automóvil Hyundai, el N° 3 el Bus de Tur Bus que sucedía al N° 1 y que había un móvil no identificado que trató de adelantar al N° 1. Cuando empezó a trabajar en el plano le llamó la atención la trayectoria del Bus Tur Bus, porque había una huella de frenado junto a la zona ubicada por el oficial investigador como la zona de impacto, para lo que tuvo que acomodar al bus lo más cerca del eje de la calzada para hacer coincidir con la información del oficial investigador sobre la frenada de este bus, ya que no cuadraba la trayectoria del bus, con respecto a la huella de frenada y su trayectoria cuando salió el bus de la calzada. El oficial pone en la dinámica que el primer impacto, que fue de roce entre el móvil 1 y 2, dice que habría hecho variar o desestabilizar al vehículo 2 y este haya impactado con el Bus Tur Bus, ya que sitúa la zona del segundo impacto en la pista en que transitaba el Bus, donde de acuerdo a lo que pudo apreciar merecía su duda, ya que tuvo que hacer coincidir la trayectoria para poder poner el impacto ahí. Después de esto, se desligó de este caso porque seguían llegando otros casos que investigar. Posteriormente, hace un par de meses lo contacta don Eduardo Perales, ya que vio su nombre y firma en el informe antes dicho, donde conversó con él y le explica de este caso, en su calidad de perito de tránsito, solicitándole un nuevo plano que reflejara la real dinámica del accidente. Dicho encargo lo realizó en un programa de auto cad, utilizando para ello como modelo su plano realizado anteriormente y que consta en el informe 172 A 2013, pero dispuesto de otra perspectiva, donde la real dinámica del accidente es que existe un cuarto vehículo que viene antecediendo al automóvil Toyota y al Bus, vehículo circulando desde Lebu hacia



Foja: 1

Los Álamos, el cual no alcanza a realizar la maniobra de adelantamiento por lo que retoma su pista, no ejecutando dicho adelantamiento, donde detrás de este cuarto vehículo vienen adelantando en caravana el automóvil Toyota e inmediatamente detrás el Bus de Tur Bus, donde el Toyota en su afán de recuperar su pista colisiona, colisiona de roce al Hyundai que venía en sentido contrario, hacia Lebu, lo que no hace perder el control al Hyundai, ya que los daños no reflejan un gran impacto, sino que solo roce. El Hyundai sigue su trayectoria, dentro de su pista de circulación, donde colisiona frontalmente con el vértice delantero izquierdo del bus y ello dentro de la pista de circulación del automóvil Hyundai; le consta este segundo impacto en la pista del Hyundai por el eje de trayectoria del bus, en base a la huella de frenado, que si la proyectamos hacia atrás el bus venía por la pista contraria adelantando. Con esta dinámica le cuadra la trayectoria del bus, porque no podría ser de otra forma, a un bus de dos pisos una maniobra brusca lo habría hecho volcar, lo que fue reflejado en los nuevos planos que confeccionó. Luego del segundo impacto, el bus sigue su eje de trayectoria, hacia la derecha, donde se lleva adosado el auto Hyundai probablemente, hasta que el conductor del Bus aplica los frenos, lo que provoca que se suelte el vehículo menor y que este se vaya en retroceso hacia su posición final y el bus sigue hacia afuera siguiendo el eje de trayectoria que señaló anteriormente. En conclusión, puede decir que tanto el conductor del Toyota, como el del Bus, cometieron un acto temerario al efectuar un adelantamiento, obviamente con su visual obstruida, lo que ocasiona el accidente.

Preguntado para que diga qué conocimientos técnicos posee y qué cargos ocupa o ha ocupado, como para aseverar lo que acaba de declarar, responde que es Carabinero en retiro, con 32 años de servicios, 23 de ellos en investigación de tránsito tanto como planimetrista, como dibujante y reconstructor de accidentes de tránsito. Actualmente es perito judicial de la Corte de Apelaciones de Concepción. Se le exhibe el documento acompañado, signado con el N° 2 "INFORME TÉCNICO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO ANALIZADO NRO. 14 - A - 219", que contiene cuatro planos anexados, para que los reconozca como de su autoría y si tienen su firma estampada en ellos, responde que el primero es el plano del anexo del informe 172 A 2013, que hizo por orden del oficial investigador, el cual le merecía dudas, ya que tuvo que cuadrarlo para que coincidiera con lo informado por el oficial investigador; el segundo plano se denomina "dinámica del accidente analizado", en el cual se grafican todos los movimientos realizados por todos los movimiento reales que hicieron todos los vehículos involucrados, como sí hubieron ocurrido los hechos, informe que es de su autoría, el cual reconoce como suyo, ya que figura su firma impresa en este. En relación al tercer plano denominado Trayectoria del móvil 2 (bus Tur Bus) antes, durante y después del impacto, se señala la trayectoria que traía el bus, antes, durante y después del impacto, plano que también tiene su firma estampada en este. El plano 4 es el



Foja: 1

desplazamiento del móvil 2 y 3 después del impacto, el cual es de su autoría, ya que consta su firma estampada al final de este.

Al punto número tres refiere que efectivamente este hecho es imputable a los demandados, el conductor del automóvil marca Toyota don Javier Carrasco y del Bus Tur Bus, don Cristian Gallardo, por las acciones temerarias que efectuaron en la maniobra de adelantamiento, al hacerlo en caravana, ya que si la hubieran realizado debidamente no se habría producido este horrible accidente que costó la vida de toda esta familia.

SEGUNDO: Que el demandado Javier Carrasco Leiva acompañó la siguiente prueba documental:

A folio 59 y 61

1.- Informe socioeconómico suscrito por la asistente social María Cichero Araneda;

2.- Finiquito de trabajo de 28 de agosto de 2017.

TERCERO: Que el demandado Cristián Ismael Gallardo Gómez rindió, a su vez, la siguiente prueba documental:

A folio 74

1.- Copia de la sentencia penal de fecha 19 de Mayo de 2016, recaída en los autos criminales sobre cuasidelito de homicidio, RUC 1300986335-9 y RIT N° 601-2015, de este Juzgado de Letras y Garantía de Lebu.

2.- Copia del Decreto N° 22 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, promulgado el 21 de febrero de 2006 y publicado en el Diario Oficial de 20 de mayo de 2006.

3.- Copia del Decreto N° 181 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, promulgado con fecha 15 de diciembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial de 22 de diciembre de 2006, que modificó al Decreto 22 anterior.

4.- Set de 14 fotografías.

5.- Un documento electrónico que contiene el audio completo del juicio penal oral tramitado y sentenciado en los autos RIT N° 601-2015 del ingreso criminal de este Juzgado de Letras y Garantía de Lebu, incorporado a través de audiencia de percepción documental que consta a folio 91, celebrada con fecha 18 de julio de 2019.

A folio 76

6.- Un documento electrónico consistente en video publicado en la página web Youtube, en la dirección de internet: <https://youtu.be/3wKSy7dFY5Q>, incorporado a través de audiencia de percepción documental que consta a folio 91, celebrada con fecha 18 de julio de 2019, de una duración de 03:21, donde se transmite nota efectuada por “Mundo Noticias” y se indica como referencia en dicha página web como: “Familia Lebu falleció en trágico accidente vehicular en ruta 160”.

CUARTO: Que, por su parte, el demandado Empresa de Transportes Rurales Limitada no rindió prueba alguna dentro de plazo legal.



Foja: 1

EN CUANTO A LA PRIMERA OBJECCIÓN DOCUMENTAL (cuaderno 2.0)

QUINTO: Que a folio 2 del cuaderno de objeción documental 2.0 el demandado Cristián Ismael Gallardo Gómez objeta los documentos acompañados por la demandante a folio 68 consistentes en metapericia del Informe Técnico Pericial N° 172-A-2013 de la SIAT de Concepción, elaborado por el ex funcionario de carabineros Sergio Jorge Muñoz Vásquez e informe técnico del accidente de tránsito analizado N° 14-A-219, de fecha 31 de mayo de 2019, elaborado por el Capitán de Carabineros (R) Eduardo Perales Martínez, que contiene como anexos 4 planos elaborados por don Ramón Arcides Ruay Oyarzo, planimetrista, Sub-Oficial de Carabineros (R) y cuatro fotografías tomadas en el sitio del suceso momentos luego del accidente. En primer lugar, la impugnación se funda en que se trata de documentos privados que emanan de terceros ajenos al juicio, quienes no han comparecido a reconocerlos y que han sido elaborados después de seis años de ocurrido el accidente.

En segundo lugar, se impugnan por falsedad ideológica, desde que en el primer documento se atribuye responsabilidad infraccional al conductor del bus al pretender hacer una maniobra imprudente de adelantamiento y de obstrucción de la circulación del vehículo conducido por el Sr. Barto, y porque en el segundo se afirma la existencia de un hecho falso, cual es la eventual culpa del conductor del bus al pretender hacer la maniobra imprudente antes referida, circunstancias que no fueron establecidas en la investigación penal ni en la sentencia dictada como consecuencia de ella.

SEXTO: Que evacuando el traslado conferido la demandante solicita el rechazo de las objeciones formuladas señalando, en síntesis, que aquellas no aparecen fundadas en ninguna causal legal, sino que más bien miran al valor probatorio que el tribunal debe otorgarles, que efectivamente se trata de instrumentos privados emanados de terceros, los cuales sí comparecieron al juicio a reconocerlos.

SÉPTIMO: Que las impugnaciones deducidas por el demandado Cristián Ismael Gallardo Gómez habrán de ser desechadas, toda vez que ellas están dirigidas a cuestionar el valor probatorio de los instrumentos acompañados por la demandante, tarea que es ajena a las partes litigantes y solo corresponde ser ejercida por el órgano jurisdiccional al momento de ponderar los medios de prueba que fueron allegados al proceso. Lo mismo ocurre con la eventual falsedad ideológica en que se fundan las objeciones planteadas, en cuanto solo miran al mérito probatorio de los instrumentos impugnados.

Cabe señalar, además, que tal como lo sostiene la actora, los instrumentos objetados si fueron reconocidos en juicio por los testigos Sergio Muñoz Vásquez, Eduardo Perales Martínez y Ramón Ruay Oyarzo.

EN CUANTO A LA SEGUNDA OBJECCIÓN DOCUMENTAL (cuaderno 4.0)



Foja: 1

OCTAVO: Que a folio 3 del cuaderno de objeción documental 4.0 el demandado Empresa de Transportes Rurales Limitada objeta los documentos acompañados por la demandante a folio 84 del cuaderno principal, consistentes en currículum vitae de don Sergio Muñoz Vasquez, título de Investigador de Accidentes en el Tránsito de don Eduardo Perales Martínez y oficio sobre minuta de archivo, dirigido al Fiscal Nacional Económico, remitido por el Jefe de División de investigaciones, sobre Denuncia contra Buses Bío Bío. Para ello argumenta que los dos primeros son fotocopias y no documentos originales, que además son instrumentos privados que emanan de terceros que no comparecieron al juicio a reconocerlos y que los testigos Sergio Muñoz Vásquez y Eduardo Perales Martínez no los reconocieron al prestar declaración, agregando que esa parte tampoco los reconoce. En segundo lugar, impugna los mismos instrumentos en cuanto a lo que la contraria pretende que ellos acrediten, señalando que aun cuando quienes los elaboraron hayan sido funcionarios de carabineros no significa que sean más expertos que los funcionarios en servicio activo del SIAT de carabineros que estuvieron en el lugar de la colisión.

Tratándose del tercer documento, sostiene que se trata de una fotocopia y no de un documento original, que es un instrumento privado que emana de un tercero que no ha comparecido al juicio a reconocerlo, que esa parte no lo reconoce y que no guarda relación alguna con los hechos del juicio.

NOVENO: Que a folio 2 del cuaderno de objeción documental 4.0 la demandante evacuó el traslado conferido y sostuvo que la contraria no efectúa realmente ninguna impugnación por causa legal, sino que más bien realiza comentarios relativos al valor probatorio que el tribunal debe darles. Agrega que los testigos Sergio Muñoz Vásquez y Eduardo Perales Martínez hicieron alusión a los dos primeros documentos objetados cuando comparecieron al juicio a prestar declaración.

DÉCIMO: Que las objeciones en análisis igualmente han de ser desestimadas, por cuanto están dirigidas a cuestionar el mérito probatorio de los documentos acompañados por la actora, tarea que como ya se señaló está reservada al órgano jurisdiccional y no a las partes del juicio.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN ILÍCITO PENAL

UNDÉCIMO: Que los demandados Cristian Gallardo Gómez y Empresa de Transportes Rurales Limitada deducen excepción de falta de competencia para conocer y decidir un ilícito penal, argumentando que si el fundamento de la indemnización es la comisión de un ilícito penal específico por Cristian Gallardo Gómez, la demanda no puede prosperar sin que previamente se establezca judicialmente la participación culpable en los mismos cuasidelitos por los cuales fue condenado como único autor el demandado Javier Carrasco Leiva, sin que este tribunal civil tenga atribución alguna para conocer ni juzgar delitos ni cuasidelitos penales.



Foja: 1

DUODÉCIMO: Que la excepción antes aludida habrá de rechazarse, desde que lo que se demanda en estos autos es la responsabilidad de los demandados por los daños ocasionados a los actores a raíz de la muerte de las personas que se individualizan en el libelo, mas no que se declare la responsabilidad penal del demandado Cristian Gallardo Gómez. Así por lo demás se decidió por este tribunal al resolver la excepción dilatoria de incompetencia deducida por este último demandado a folio 21, cuyos fundamentos son los mismos que motivan la presente alegación de fondo.

Tal como afirma la parte demandante, la acción civil es independiente de la acción penal, así lo dispone el artículo 67 del Código Procesal Penal al prescribir que *“La circunstancia de dictarse sentencia absolutoria en materia penal no impedirá que se dé lugar a la acción civil, si fuere legalmente procedente”*. En consecuencia, aun cuando el demandado Cristian Gallardo Gómez hubiese sido absuelto en juicio criminal, igualmente resulta procedente accionar en sede civil para perseguir la responsabilidad aquiliana que de ese hecho pudiese derivarse. En el presente caso no se ha pronunciado sentencia penal absolutoria a su respecto, sino que simplemente el proceso penal respectivo no fue dirigido en su contra.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN

DECIMOTERCERO: Que la demandada Empresa de Transportes Rurales Limitada opuso excepción de prescripción extintiva de la acción, afirmando que es un hecho que el accidente que causó la muerte de don Enoc Barto Rojas, doña Sofia Zuñiga Yepsen y de Benjamín y Pablo Andrés Barto Zuñiga acaeció el día 8 de octubre de 2013 y que la demanda de autos fue notificada a su parte el día 23 de octubre de 2017, que conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil la acción deducida en estos autos prescribe en cuatro años desde la perpetración del acto, por lo que toda posible responsabilidad civil que se estime pudiese asistirle se encuentra prescrita, pidiendo que así se declare.

DECIMOCUARTO: Que la acción deducida por la parte demandante en la presente causa prescribe en cuatro años contados desde la perpetración del hecho en los términos del artículo 2332 del Código Civil. Asimismo, del mérito de la causa se desprende que la demandada Empresa de Transportes Rurales Limitada fue notificada el día 23 de octubre de 2017, habiendo transcurrido más de cuatro años desde el día 8 de octubre de 2013, en que tuvo lugar el hecho que funda la responsabilidad civil que se demanda.

No obstante, la acción ejercitada contra la demandada Empresa de Transportes Rurales Limitada se basa en la disposición del artículo 169 de la Ley 18.290, esto es, en la responsabilidad solidaria que tal norma prescribe para el dueño del vehículo al señalar en sus incisos 1° y 2° que *“De las infracciones a los preceptos del tránsito será responsable el conductor del vehículo. El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o*



Foja: 1

perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente.”

Por tanto, en la especie resulta aplicable el artículo 2519 del Código Civil, que dispone que la interrupción que obra en perjuicio de uno de varios codeudores no perjudica a los otros, salvo que haya solidaridad, siendo este el caso de autos. De esta forma, con la notificación de la demanda al demandado Cristian Gallardo Gómez el día 7 de octubre de 2017, se interrumpió la prescripción de la acción no solo en perjuicio de aquel sino también de la demandada solidaria Empresa de Transportes Rurales Limitada, por lo que la excepción formulada ha de ser desestimada.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA

DECIMOQUINTO: Que los demandados Empresa de Transportes Rurales Limitada y Cristian Gallardo Gómez igualmente dedujeron excepción de falta de legitimación activa, argumentando que conforme al artículo 2315 del Código Civil puede pedir la indemnización derivada de un delito o un cuasidelito, la víctima inmediata o directa sobre la que recae la lesión o sus herederos. Agregan que en el caso de autos las cuatro personas fallecidas no dejaron descendencia ni cónyuges sobrevivientes, por lo que debe aplicarse el orden de sucesión establecido en el artículo 989 del Código Civil, según el cual son herederos de los difuntos los ascendientes más próximos. Así, los únicos herederos legitimados para ejercer la acción indemnizatoria son el señor Segundo Zúñiga Burgos y doña Eunice del Carmen Yepsen Monsalves, en su calidad de padres y abuelos, respectivamente, de Sofía Lorena Zúñiga Yepsen y de Benjamín y Pablo Andrés Barto Zúñiga. Por su parte, los demás demandantes doña Marjorie Vanessa Zúñiga Yepsen, doña Nitza Pamela Zúñiga Yepsen, don Alejandro Zúñiga Yepsen y don Fabián Ignacio Zúñiga Yepsen no son herederos de ninguna de las cuatro víctimas y ninguno de los demandantes es heredero de don Enoc Jeremías Barto Rojas.

DECIMOSEXTO: Que esta alegación también debe ser desechada, toda vez que lo que se demanda por los actores en este juicio es el daño moral sufrido por ellos a consecuencia de la muerte de las víctimas inmediatas; es decir, no se trata del ejercicio de la acción transmitida por las víctimas directas a sus herederos, sino de la acción personal de los demandantes por los perjuicios morales soportados como víctimas mediatas o por repercusión, de ahí que funden su demanda en el daño moral experimentado por la muerte de un familiar cercano y querido.

El daño que se demanda es el denominado daño por rebote o repercusión, que se ha conceptualizado como el que nace a consecuencia del perjuicio provocado a una víctima inicial de un hecho ilícito, y que afecta a personas diversas del sujeto inmediatamente perjudicado (Fabián Elorriaga De Bonis, “El daño por repercusión o rebote”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 26 N° 2, p.369).

El mismo autor agrega que el daño por repercusión se plantea principalmente en casos de lesiones corporales o muerte de la víctima inicial, dado que junto al perjuicio



Foja: 1

que sufre el directamente lesionado o fallecido, acontece que su cónyuge, hijos o los otros sujetos que de él dependen o que con él se relacionan, se vean perjudicados patrimonial o extrapatrimonialmente (obra citada p. 369).

En consecuencia, el daño moral no solo puede ser reclamado por la víctima directa del hecho ilícito sino por todos aquellos que de alguna manera lo sufren recibiendo los efectos del hecho antijurídico, situación en la que se encontrarían los demandantes de autos.

EN CUANTO AL FONDO

DECIMOSÉPTIMO: Que con la prueba rendida por la parte demandante a folio 69, especialmente parte detenidos, acta de entrega de fallecidos e informes de autopsia comprendidos en la carpeta investigativa de la Fiscalía Local de Lebu RUC 1300386335-9, por cuasidelito de homicidio y sentencia definitiva de 29 de mayo de 2016 dictada en causa Rit 601-2015 del Juzgado de Garantía de Lebu, se tiene por establecido que el día 8 de octubre de 2013, cerca de las 21:20 horas, el demandado Javier Andrés Carrasco Leiva conducía por la ruta 160 en dirección Lebu-Los Álamos el vehículo marca Toyota modelo Corolla, placa patente única YA-1738 y que a la altura del kilómetro 119, sector Toco Toco de la comuna de Los Álamos, efectúa una maniobra de adelantamiento a un móvil no identificado que lo antecedió, traspasando con parte de su estructura el eje de calzada demarcada con línea discontinua, colisionando de roce con el automóvil marca Hyundai, modelo Accent, placa patente única SH-5595, que conducía en sentido contrario Enoc Jeremías Barto Rojas, para luego este último colisionar con el bus marca Mercedes Benz, placa patente única FWVR-12, que era conducido por Cristian Gallardo Gómez en dirección Lebu-Los Álamos. Producto de lo anterior, fallecen en forma instantánea el conductor del vehículo marca Hyundai modelo Accent, Enoc Jeremías Barto Rojas y sus acompañantes, Sofía Lorena Zúñiga Yepsen, Pablo Andrés Barto Zúñiga y Benjamín Enoc Barto Zúñiga.

Los certificados de defunción acompañados a folio 1 dan cuenta del hecho de la muerte de las cuatro personas antes referidas en la fecha señalada y su causa, esto es, politraumatismo en el caso de los dos primeros y traumatismo craneo encefálico tratándose de los dos últimos, todos ocurridos en accidente de tránsito.

DECIMOOCCTAVO: Que la acción indemnizatoria intentada tiene su fundamento en la supuesta responsabilidad extracontractual de los demandados, por lo que la primera cuestión que debe revisarse, acorde a los términos en que se ha planteado la litis, es la existencia o no de un hecho doloso o culposo imputable a la parte demandada y, en el caso que ello sea efectivo, posteriormente examinar la concurrencia de los demás elementos o condiciones que hacen procedente dicha responsabilidad, vale decir, si ese hecho ocasionó o no un daño a los demandantes y si este daño fue o no una consecuencia directa e inmediata de aquel hecho, esto es, la relación de causalidad que habría existido entre el hecho doloso o culposo y el daño, debiendo tenerse presente en



Foja: 1

este orden de razonamientos que según las reglas del onus probandi la prueba de estos supuestos es de exclusiva incumbencia de la actora.

DECIMONOVENO: Que con el objeto de acreditar la concurrencia del primero de los supuestos señalados, esto es, la existencia de un hecho doloso o culposo imputable a la parte demandada, la actora acompaña a folio 69, con citación y sin que fuere objetada, copia de la causa Rit 601-2015 del ingreso del Juzgado de Garantía de Lebu, dentro de cuyas piezas se comprende la sentencia definitiva pronunciada en dichos autos, relativa al aludido accidente y la sentencia dictada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, al conocer del recurso de nulidad interpuesto por la Defensa en contra de la resolución de primer grado.

Mediante la sentencia del tribunal de alzada de 12 de julio de 2016 se rechaza el recurso de nulidad deducido contra la dictada por el Juzgado de Garantía de Lebu el 19 de mayo de 2016, en la cual en lo pertinente se condena al demandado Javier Andrés Carrasco Leiva, como autor de cuatro cuasidelitos de homicidio cometidos el día 8 de octubre de 2013 en la comuna de Los Álamos, respecto de las víctimas Enoc Jeremías Barto Rojas, Sofía Lorena Zúñiga Yepsen, Pablo Andrés Barto Zúñiga y Benjamín Enoc Barto Zúñiga, a la pena de doscientos cincuenta días de reclusión menor en su grado mínimo, suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de dos años y suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena.

De esta forma, los citados instrumentos públicos constituyen prueba suficiente acerca del evento dañoso, constitutivo de un hecho ilícito, en lo que corresponde al conductor responsable condenado Carrasco Leiva, desde que la sentencia penal tiene mérito de cosa juzgada respecto del sentenciado, siéndole por tanto imputable. En consecuencia, se tendrá por concurrente el primer supuesto de la responsabilidad extracontractual que se examina en lo que respecta al demandado Javier Carrasco Leiva.

En base al mismo razonamiento, los referidos instrumentos acreditan de modo fehaciente la culpa atribuible en el hecho al demandado Carrasco Leiva y la relación de causalidad existente entre aquella conducta y el daño provocado con motivo del accidente a las víctimas del ilícito penal.

VIGÉSIMO: Que, por el contrario, tratándose del demandado Cristián Ismael Gallardo Gómez no existe sentencia penal alguna que determine su responsabilidad en el accidente de tránsito antes aludido. Por ello, para fundamentar la acción incoada en su contra la parte demandante argumenta que a raíz de los hechos ocurridos la Fiscalía de Lebu inició la investigación pertinente, en la que inexplicablemente se persiguió solo la responsabilidad de Javier Carrasco Leiva y no la del conductor del bus Cristian Gallardo Gómez, aun cuando existían antecedentes que indicaban su igual y concurrente responsabilidad en los hechos, pues conducía el bus que venía inmediatamente detrás del vehículo conducido por el señor Carrasco Leiva y lo hacía igualmente desatento de las condiciones del tránsito, puesto que al observar la colisión por roce de los otros dos vehículos y percatarse que el conducido por el señor Barto Rojas se desestabiliza y cruza



Foja: 1

el eje de la calzada, no detiene ni disminuye su velocidad, sino por el contrario inexplicablemente acelera la velocidad del bus, provocando la fatal colisión entre su vehículo y el conducido por el señor Barto Rojas, de lo cual daría cuenta la declaración prestada por el demandado Cristian Gallardo Gómez en la causa penal al referir que *"Piensa que no reaccionó bien; que con los nervios aceleró en vez de frenar, son reacciones de segundos"*. Agrega la demandante que lo antes expuesto es un indicativo que el señor Gallardo no iba atento a las condiciones del tránsito; que no guardó la prudente distancia con el vehículo que le antecedió para frenar ante cualquier emergencia y que no conducía a una velocidad razonable como para considerar posibles riesgos y que le hubiese permitido controlar el vehículo en caso de emergencia para evitar la colisión. Sostiene que ambos conductores demandados han cometido de manera conjunta los ilícitos mencionados con resultado de muerte del grupo familiar.

VIGESIMOPRIMERO: Que la sentencia definitiva de 19 de mayo de 2016, pronunciada en causa Rit 601-2015, del Juzgado de Garantía de Lebu, concluye en su considerando décimo que la causa del accidente se debió a que el imputado Javier Carrasco Leiva "...realiza una maniobra de adelantamiento hacia su izquierda, ocupando la pista con tránsito en sentido contrario, traspasando el eje central, sin tener el tiempo ni espacio suficiente para realizarla, lo que provoca que colisione de roce, en su costado delantero izquierdo, con el vehículo que venía en sentido contrario, el que se desestabiliza y colisiona de frente con el bus que venía detrás del vehículo del imputado".

El mismo considerando décimo de la sentencia citada establece que tal conclusión se basa en la prueba pericial rendida en juicio, consistente en la declaración del perito Boris Edgardo Yáñez Nahuelhuaque al señalar "En este sentido, el tribunal tiene en consideración la declaración del perito **Boris Edgardo Yáñez Nahuelhuaqui**, funcionario policial de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, respecto del Informe Técnico N° 172-A-2013 de la SIAT de la Prefectura de Carabineros N° 18 de Concepción, de fecha 27 de marzo de 2014, complementado por el Informe Técnico Pericial N° 11-E-2015 de la misma institución, con sus respectivos anexos. En virtud del reconocimiento del levantamiento planimétrico del sitio del suceso, se corrobora lo establecido en virtud de la testimonial ya analizada en relación a la dinámica de los hechos, móviles que intervienen, posición inicial y final de cada uno de ellos; con el reconocimiento del set fotográfico que también se le exhibe, se corrobora lo relativo a los tres móviles participantes, individualización de sus placas patentes, daños sufridos, posición inicial y final, aclarando que las conclusiones que establece se elaboran en base a un estudio científico, técnico, de las evidencias encontradas en el sitio del suceso, no se obra en base a supuestos o hipótesis que no estén debidamente comprobadas; en ese sentido, luego de relatar la forma en que ocurren ambas colisiones, tanto la de roce entre el imputado y el vehículo de las víctimas, y la segunda, entre dicho vehículo y el bus, exponiendo lo relativo a las huellas, marcas de pintura en el vehículo del imputado de color azul, color que es coincidente con el vehículo de las víctimas, los daños del



Foja: 1

vehículo de aquél, en el costado delantero izquierdo, las que son reconocidas, a su vez, por el acusado en su declaración, cuando menciona:“(...) *fue toda la parte del neumático, la parte de adentro de lo que compete al neumático, lo que es la bandeja, biela, espejo, toda la parte delantera, lado izquierdo, del conductor adelante(...)*”, le permite concluir que la causa basal del accidente se debió a que: “(...) **se estableció que el participante 1 conduce no atento a las condiciones del tránsito del momento realizando una maniobra de adelantamiento sin tener el tiempo ni el espacio suficiente para realizarla, colisionando con el móvil 2, que se desplazaba en sentido contrario, y donde se genera la colisión y posteriormente las proyecciones: el vehículo N° 2, posteriormente a este impacto, colisiona en su lateral derecho con el bus de la empresa Tur Bus; la causa basal del accidente es que el participante 1, el señor Carrasco Leiva, realiza una maniobra de adelantamiento sin tener el tiempo ni el espacio suficiente para realizarla en ese sitio del suceso, en el lugar del accidente (...)**”.” Según se lee en la misma sentencia condenatoria y se desprende de la declaración prestada por el perito de la SIAT en el juicio oral, conforme a los audios acompañados a folio 74, el participante 1 corresponde a Javier Carrasco Leiva, el participante 2 es el conductor fallecido y el participante 3 es el conductor del bus de la empresa Tur Bus.

VIGESIMOSEGUNDO: Que a fin de demostrar sus aseveraciones y desvirtuar que la única causa del accidente es la establecida en la sentencia definitiva pronunciada en el juicio penal, la actora rindió a folio 68 prueba documental consistente en metapericia del informe técnico pericial N° 172-A-2013 de la SIAT de Concepción e informe técnico del accidente de tránsito analizado N° 14-A-219, y testimonial de folio 71 y 82.

Los instrumentos individualizados establecen como causa basal del accidente que los participantes 1 y 2 al realizar una maniobra de adelantamiento indebida, al no poseer el tiempo y espacio suficiente para ello, con sus visuales obstruidas debido a que ambos realizaron esta maniobra en forma secuencial, se percataron tardíamente de la presencia del móvil 3 que se dirigía en sentido contrario, colisionándolo. Conforme a los mismos instrumentos el participante 1 corresponde a Javier Carrasco Leiva, el participante 2 a Cristian Gallardo Gómez y el 3 a Enoc Barto Rojas. Ambos informes además concluyen que el informe técnico N° 172-A-2013 elaborado por la SIAT en el marco de la investigación penal realizada por el Ministerio Público, no refleja la realidad de cómo ocurrió el accidente y no comprende a todos los responsables, pues no se investiga la responsabilidad del participante 2, quien conforme al replanteamiento de la causa basal que ellos realizan también intervino en los hechos al efectuar un adelantamiento en cadena, posibilitando así que el accidente se concretara. La fundamentación de tal conclusión se encuentra, según los mismos informes, en que los impactos del móvil 1 contra el móvil 3 e impacto del móvil 2 contra el móvil 3 ocurrieron en el costado derecho de la calzada de la Ruta 160 en dirección al nororiente, sobre la base de las



Foja: 1

trayectorias de los mismos móviles antes, durante y después del accidente, que es conteste con la marcha analítica del mismo accidente. El punto donde ocurrió el primer impacto se desprende del plano efectuado por el planimetrista Ramón Ruay Oyarzo, que se anexa al informe técnico del accidente de tránsito analizado N° 14-A-219. El punto del segundo impacto se funda en la huella de frenada del móvil 2, único indicio fijado en el levantamiento planimétrico de la SIAT, precisando el informe técnico del accidente de tránsito analizado N° 14-A-219 que conforme a la configuración, diseño y dimensión de esta huella, si se prolonga en sentido contrario desde el inicio de la marca de huella de frenada, sitúa al móvil 2 con parte de su estructura sobre el eje de la calzada y por consiguiente invadiendo la pista de circulación del móvil 3, lo que afirma la maniobra de adelantamiento que no alcanza a desistir oportunamente el móvil 2 que colisiona al móvil 3, mientras este último se dirigía por su pista de circulación.

El testigo Eduardo Perales Martínez reconoció como de su autoría el informe técnico de accidente de tránsito analizado N° 12-A-219. A su vez, el testigo Ramón Ruay Oyarzo reconoció haber elaborado los cuatro planos anexos al referido informe técnico y el testigo Sergio Muñoz Vásquez, reconoció el documento denominado metapericia del informe técnico pericial N° 172-A-2013 de la SIAT de Concepción.

Al deponer en juicio los tres testigos describen, en síntesis, la siguiente dinámica del accidente: los conductores de los móviles 1 y 2 efectuaron una maniobra indebida de adelantamiento sin tener el tiempo y espacio suficiente, traspasando el eje de la calzada en forma consecutiva, ya que el móvil 1 antecedía al móvil 2, percatándose tardíamente de la presencia y circulación del móvil 3 que conducía en sentido contrario a estos, sumado a ello con su visual obstruida por la presencia y circulación del móvil 4, no considerado en el informe SIAT, el que antecedía al móvil 1 y 2, percatándose el conductor del móvil 4 Milcheo Jerez de la presencia del móvil 3 en la vía, circulando en sentido contrario, el cual también lo hacía en maniobra de adelantamiento a un vehículo no identificado y en la misma dirección o sentido, efectuando una maniobra recuperativa de pista logrando retomar esta y ubicarse detrás del vehículo no identificado; en tanto el móvil 1 conducido por Carrasco y en maniobra de adelantamiento todavía en la pista izquierda realiza acción recuperativa de su pista de circulación, es decir, costado derecho de la calzada, colisionando en la pista de circulación con el móvil 3 conducido por Enoc Barto Rojas, de roce, con el tercio anterior del lateral izquierdo de su vehículo en el tercio posterior del lateral izquierdo del móvil 3. Este impacto leve, de poca o escasa fuerza, hace que el vehículo 3 continúe su desplazamiento por su pista de circulación, en proceso de desaceleración, trayecto en el cual fue colisionado con la parte frontal izquierda del bus de la empresa Tur Bus, en la parte frontal izquierda y media del vehículo menor N° 3. Dicho impacto se ubica en la pista de circulación del móvil 3, toda vez que el bus al ver la presencia de este, en sentido contrario, se desplazaba en maniobra recuperativa de su pista de circulación, trasladando en proceso de arrastre al móvil 3 en la misma dirección que este llevaba.



Foja: 1

VIGESIMOTERCERO: Que de lo relacionado en los dos motivos precedentes queda en evidencia que las conclusiones de la sentencia pronunciada en el juicio penal son diametralmente opuestas a las que se desprenden de la prueba rendida por la demandante en este procedimiento en cuanto a la causa del accidente de tránsito ocurrido el día 8 de octubre de 2013; toda vez que mientras la citada sentencia determina como responsable del hecho al imputado Javier Carrasco Leiva, sin establecer que el conductor del bus Cristian Gallardo Gómez tuviese participación en el curso causal, la prueba instrumental y testimonial de la demandante reseñada en el considerando anterior concluye que el chofer del bus si tuvo responsabilidad en los hechos que ocasionaron la muerte del grupo familiar.

En este escenario necesariamente debe otorgarse valor a una teoría del caso en desmedro de la otra, inclinándose este tribunal a favor de lo determinado por la sentencia dictada en el proceso penal en desmedro de la prueba documental y testimonial de la demandante relacionada precedentemente, por las razones que pasan a expresarse.

En primer término, porque el peritaje practicado en el marco de la investigación criminal por el perito de la SIAT, Capitán de Carabineros Boris Yáñez Nahuelhuaique, es el único que se basó en el examen directo del sitio del suceso horas después del accidente, sin que ocurra lo mismo con los informes elaborados por los testigos Eduardo Perales Martínez y Sergio Muñoz Vásquez, los cuales solo se fundan en el análisis de la carpeta investigativa y en especial del informe técnico N° 172-A-2013.

En segundo término, tanto la metapericia del informe técnico pericial N° 172-A-2013 como el informe técnico de accidente de tránsito analizado N° 12-A-219 basan parte de sus conclusiones en los planos elaborados por el planimetrista Ramón Ruay Oyarzo, en cuanto en ellos se evidencia una trayectoria del bus diversa de la establecida en el informe técnico de la SIAT y su plano respectivo. Conforme a la declaración prestada por el testigo Ramón Ruay Oyarzo en este proceso a folio 82, él mismo fue quien confeccionó el plano planimétrico comprendido en el informe técnico N° 172-A-2013 de la SIAT, precisando que cuando empezó a trabajar en él le llamó la atención la trayectoria del bus Tur Bus, porque había una huella de frenado junto a la zona ubicada por el oficial investigador como la zona de impacto, para lo que tuvo que acomodar al bus lo más cerca del eje de la calzada para hacer coincidir con la información del oficial investigador sobre la frenada de este bus, ya que no cuadraba la trayectoria del bus.

Por tanto, el mismo planimetrista representa en dos planos diferentes una distinta dinámica de los hechos y trayectoria de los móviles, en especial del bus conducido por el demandado Cristian Gallardo Gómez e indica al deponer en la presente causa que su labor en este caso fue reconstruir lo que había pasado en terreno, de acuerdo a la dinámica que le entregó el oficial investigador de la SIAT, siendo con posterioridad contactado por el testigo Eduardo Perales Martínez, quien le explica el caso y le pide elaborar un nuevo plano que reflejara la real dinámica del accidente. De lo anterior se



Foja: 1

concluye que el testigo Ramón Ruay Oyarzo en ambos casos se limitó a representar gráficamente la dinámica de los hechos que en un primer momento le entregó el investigador de la SIAT y luego el testigo de la actora Eduardo Perales Martínez, lo que impide que en base a su declaración pueda desvirtuarse el mérito del informe técnico N° 172-A-2013 de la SIAT.

Por lo demás, si bien el testigo Ramón Ruay Oyarzo refiere que le merecía duda la dinámica descrita por el investigador de la SIAT, no justifica razonablemente por qué no representó aquello al oficial investigador ni tampoco aclara si se encontraba obligado a hacer coincidir el plano con la dinámica descrita por aquel; por el contrario, él mismo precisa que tuvo que acomodar al bus lo más cerca del eje de la calzada para hacerlo coincidir con la información del oficial investigador sobre la frenada de este bus, de lo cual se desprende que con ello la trayectoria del bus si se condice con la huella de frenada.

En tercer lugar, la metapericia del informe técnico pericial N° 172-A-2013 y el informe técnico de accidente de tránsito analizado N° 12-A-219 se fundan también en la huella de frenada del bus conducido por el demandado Cristian Gallardo Gómez, concluyendo a partir de ella que la colisión ocurre en la pista de circulación del móvil de Barto Rojas al invadir el bus tal pista en su intento por adelantar a otro vehículo. Sin embargo, ninguno de los testigos que elaboraron los citados documentos tuvieron acceso al sitio del suceso, es más solo conocen las características de tal huella de frenada por el levantamiento planimétrico realizado por el testigo Ramón Ruay Oyarzo, quien tampoco concurrió al sitio del suceso. Además, los citados instrumentos cuestionan que el sitio del suceso no fue fijado ni cuidado adecuadamente, pese a lo cual basan sus conclusiones en la huella de frenada representada en el levantamiento planimétrico del sitio del suceso.

Por otro lado, ninguno de los testigos que depuso en el juicio criminal hizo referencia a que el conductor del bus haya estado realizando una maniobra de adelantamiento por la calzada izquierda en dirección Lebu - Los Álamos al momento de impactar con el vehículo de las víctimas.

Las aseveraciones de los testigos de la actora que declararon en estos autos tampoco permiten así concluirlo, toda vez que solo los testigos Verónica Órdenes Morales y Narciso Salinas Reinoso estuvieron presentes el día 8 de octubre de 2013 en el lugar del accidente, mas no observaron cómo este ocurrió, pues se trasladaban como pasajeros al interior del bus, por lo que declaran solo acerca de lo que sintieron desde tal perspectiva. Además, lo declarado por ellos se contradice con lo señalado en estrados por el testigo de la actora Eduardo Perales Martínez en cuanto refiere que en atención a que el señor Gallardo conducía un bus de dos pisos, el desistimiento de la maniobra de adelantamiento que llevaba linealmente con el vehículo del señor Carrasco tuvo que haber sido paulatina y retardada, de lo contrario hubiese producido un volcamiento de su máquina. En cambio, los testigos Verónica Órdenes Morales y Narciso Salinas Reinoso señalaron que sintieron que el bus hizo un movimiento brusco, luego el bus chocó con



Foja: 1

algo y sintieron una frenada. La misma contradicción se observa entre la declaración prestada por aquellos y el testigo de la parte demandante Ramón Ruay Oyarzo, al precisar que con la dinámica que describe le cuadra la trayectoria del bus, porque no podría ser de otra forma, que a un bus de dos pisos una maniobra brusca lo habría hecho volcar, lo que fue reflejado en los nuevos planos que confeccionó.

En cuarto término, los mismos dos instrumentos ya individualizados plantean que el primer impacto que tuvo lugar entre el móvil de Barto Rojas y el demandado Javier Carrasco Leiva fue de baja energía de roce y generó una desestabilización leve de ambos vehículos. Esta conclusión es contraria a lo establecido en la sentencia condenatoria pronunciada en sede penal en cuanto determina en su considerando noveno que el vehículo de las víctimas transitaba por su pista, traspasando el eje de la calzada cuando es desestabilizado en virtud de la colisión de roce con el vehículo del imputado. En efecto, al declarar en el juicio penal el demandado Javier Carrasco Leiva señaló que a raíz del choque de roce, su vehículo sufrió daños principalmente en su neumático, que intentó detenerlo pero se quedó sin dirección, al cortarse el tema de la bandeja (sic), logrando detenerlo solo con el freno de mano. A su vez, el demandado Cristian Gallardo Gómez al deponer en el mismo juicio refirió que el golpe de roce produjo la desestabilización del vehículo conducido por Barto Rojas, chocando luego de frente con el bus que él conducía. Asimismo, el oficial investigador de la SIAT al confeccionar su informe técnico N° 172-A-2013 y deponer en juicio, afirma que producto del primer impacto de roce el vehículo de las víctimas desvió su desplazamiento en dirección nororiente, colisionando con el bus que se desplazaba por su pista.

De esta forma, considerando lo declarado por el perito y los testigos en el juicio criminal y, en especial, que ante la colisión de roce sí se produjo la desestabilización del vehículo conducido por el demandado Javier Carrasco Leiva, de similar tara y masa que el vehículo que conducía Barto Rojas -según concluye la metapericia del informe técnico pericial y el informe técnico N° 12-A-219-, pues quedó sin dirección al dañarse su neumático, logrando detener el móvil solo al accionar el freno de mano; se concluye que tal colisión tuvo la entidad suficiente para ocasionar la desestabilización del móvil en que se transportaba Barto Rojas y su grupo familiar, el cual por proyección colisiona al bus de la empresa Tur Bus. Por otro lado, lo establecido en el informe técnico N° 172-A-2013 de la SIAT en orden a que el impacto se habría generado en el tercio medio del lateral izquierdo de la estructura del móvil, conforme a la dinámica de los hechos que el mismo informe describe, permite desvirtuar la conclusión de la metapericia y del informe técnico N° 12-A-219 acerca de que la colisión de roce fue de baja intensidad en atención a los daños de los vehículos involucrados.

En quinto lugar, las inconsistencias del informe técnico N° 172-A-2013 a que alude el instrumento denominado metapericia del mismo informe, no resultan relevantes para desvirtuar los razonamientos anteriores. En efecto, si bien el informe técnico señala que la orientación que llevaba el bus Tur Bus el día del accidente era nororiente, de la



Foja: 1

dinámica de los hechos que describe más adelante como de lo declarado por el perito en el juicio penal, resulta claro que la dirección era surponiente y en base a tal orientación es que se realiza el análisis del accidente y las conclusiones. En cuanto a la supuesta inconsistencia relativa a no precisar el informe técnico por qué estaba húmeda la calzada y a describir las condiciones del tiempo como semi cubierto con niebla, ninguna de tales circunstancias es considerada como relevante tanto por el informe técnico como por la metapericia al determinar la causa del accidente y describir la dinámica de los hechos. Por último, tratándose de la visual de los participantes, lo que se cuestiona por la metapericia es la descripción de la visual del demandado Javier Carrasco Leiva, mas no del demandado Cristian Gallardo Gómez, sin que exista discusión en cuanto a la responsabilidad del primero en el accidente de tránsito. Además, lo cierto es que el informe técnico y la declaración prestada por el perito Boris Yáñez Nahuelhuaique en el juicio penal son claros en orden a que el demandado Javier Carrasco Leiva conducía sin estar atento a las condiciones del tránsito, realizando una maniobra de adelantamiento sin tener el tiempo y espacio suficiente para ello.

Por último, en cuanto a que el oficial investigador de la SIAT en principio habría establecido una causa basal del accidente diversa de la contemplada en el informe técnico N° 172-A-2013, lo cierto es que la causa consignada en el parte detenidos de 8 de octubre de 2013 es solo una de carácter preliminar que se deriva de los antecedentes disponibles el día de los hechos, en cambio la señalada en el informe técnico respectivo es la que se determina en base a los elementos técnicos y científicos que en el mismo se detallan. Por lo demás, el parte detenidos de 8 de octubre de 2013 no aparece suscrito por el oficial de la SIAT que finalmente elabora el informe técnico aludido y que depuso en el juicio criminal.

VIGESIMOCUARTO: Que, así las cosas, los razonamientos anteriores conducen a estimar que la dinámica de los hechos y la causa del accidente de tránsito son las establecidas en sede penal, sin que la prueba rendida por la demandante tenga el mérito suficiente para concluir que el demandado Cristian Gallardo Gómez concurriese con su conducta a generar el resultado dañoso y, en consecuencia, que pueda imputársele responsabilidad civil como pretende la actora.

Cabe señalar, además, que la conducta culposa que la demanda imputa al demandado Cristian Gallardo Gómez consiste en conducir desatento a las condiciones del tránsito, al no detener ni disminuir su velocidad, sino por el contrario acelerar el bus, al tiempo de producirse la colisión por roce de los otros dos vehículos y percatarse que el conducido por Barto Rojas se desestabiliza y cruza el eje de la calzada, provocando así la colisión fatal; en cambio, la prueba instrumental y testimonial rendida está dirigida a demostrar que el demandado Gallardo Gómez no conducía por su pista, sino que realizaba una maniobra de adelantamiento, generándose la colisión en la pista izquierda de la vía en dirección Lebu - Los Álamos.



Foja: 1

VIGESIMOQUINTO: Que la actora afirma en su libelo que el hecho que el demandado Cristian Gallardo Gómez no haya frenado al verse enfrentado a la colisión de dos vehículos, sino que por el contrario haya acelerado, es un indicativo de que aquel no iba atento a las condiciones del tránsito, lo que concluye a partir de la declaración prestada por el mismo demandado Cristian Gallardo Gómez en la causa penal al señalar que *“ese mismo vehículo, de color verde oscuro, lo inviste a él de frente, cruzó la pista, perdió el control producto del roce. Hizo unos zigzagüeos antes de investirlo. Piensa que no reaccionó bien; que con los nervios aceleró en vez de frenar, son reacciones de segundos”*.

Sin embargo, de la declaración prestada en sede penal por el demandado Cristian Gallardo Gómez, según se aprecia de los audios del juicio oral acompañados a folio 74 e incorporados a través de la audiencia de percepción documental de folio 91, resulta claro que al hacer tales aseveraciones el demandado hacía referencia a la conducta del conductor Enoc Barto Rojas y no a su comportamiento el día del accidente, por cuanto precisa que *“me da la impresión que la persona que en paz descansa se le metió el pie entre el acelerador y el freno, más en el acelerador que en el freno”*.

VIGESIMOSEXTO: Que al no haberse demostrado la efectiva comisión de un hecho culpable por parte del demandado Cristian Gallardo Gómez, como conductor del bus, no podrá prosperar la acción incoada en su contra.

Por la misma razón, ha de desecharse la demanda deducida en contra de la demandada solidaria Empresa de Transportes Rurales Limitada, toda vez que el régimen especial de responsabilidad previsto en el artículo 169 inciso 2° de la Ley del Tránsito tiene por fundamento la culpa del conductor, que en la especie no concurre.

Así, sobre la responsabilidad del propietario o tenedor se ha sostenido que *“éstos responden por los hechos culpables del conductor, sin que sea necesario imputarles culpa alguna a ellos mismos; en consecuencia, la responsabilidad participa de los caracteres del régimen general, porque requiere culpa del agente, pero agregando un régimen de garantía que soportan el propietario y el tenedor, cuya responsabilidad es establecida con prescindencia de todo juicio personal de culpa”* (Enrique Barros Bourie, Tratado de responsabilidad extracontractual, pág. 732, primera edición).

El mismo autor agrega *“En consecuencia, la responsabilidad del propietario o tenedor es estricta en la medida que no requiere de juicio de culpabilidad respecto a su propia conducta, ni le es admisible la excusa de la propia diligencia (como sí ocurre bajo las reglas generales del Código Civil); pero, al mismo tiempo, no se trata de un régimen de responsabilidad estricta que se superpone a la responsabilidad por negligencia que soporta el conductor, sino que depende precisamente de que éste haya infringido un deber de cuidado. En consecuencia, se trata de una garantía legal a favor de la víctima, surgida a condición de que el conductor del vehículo haya incurrido en un ilícito civil”* (ob. cit., pág. 732 y 733).



Foja: 1

VIGESIMOSÉPTIMO: Que, por otro lado, con el objeto de acreditar la concurrencia del segundo elemento de la responsabilidad, es decir, si el hecho imputable al demandado Javier Carrasco Leiva ocasionó o no un daño a los demandantes, se acompañó con citación y sin que fueren objetados, los documentos de folio 1 y la testimonial de folio 71.

En cuanto al daño que se demanda por la actora, la profesora Carmen Domínguez Hidalgo ha señalado que "Estamos con aquellos que conciben el daño moral del modo más amplio posible, incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma – física o psíquica –, como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales. Comprende pues el daño moral todo menoscabo del cuerpo humano, considerado como un valor en sí y con independencia de sus alcances patrimoniales". Y agrega: "En suma, el daño moral estará constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión a un interés moral por una que se encontraba obligada a respetarlo" ("El Daño Moral", tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, páginas 83 y 84). Asimismo, el profesor José Luis Diez Schwerter indica que para la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia "el daño moral consiste y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona" ("El daño extracontractual. Jurisprudencia y doctrina", Editorial Jurídica de Chile, pág. 82).

VIGESIMOCTAVO: Que con los instrumentos públicos de folio 1 relativos a certificados de nacimiento y matrimonio, resulta suficientemente establecido que los demandantes Segundo Ajenor Zúñiga Burgos y Eunice del Carmen Yepsen Monsálvez son padres de Sofía Lorena Zúñiga Yepsen y ascendientes de segundo grado (abuelos maternos) de los niños Benjamín Enoc y Pablo Andrés Barto Zúñiga, al ser estos dos últimos hijos de Sofía Lorena Zúñiga Yepsen. De tal prueba documental resulta también que los actores Nitza Pamela, Marjorie Vanessa, Fabián Ignacio y Alejandro Ajenor Zúñiga Yepsen, son colaterales de segundo grado (hermanos) de Sofía Lorena Zúñiga Yepsen y colaterales de tercer grado (tíos maternos) de los niños Benjamín Enoc y Pablo Andrés Barto Zúñiga.

Con el certificado de matrimonio celebrado entre Enoc Jeremías Barto Rojas y Sofía Lorena Zúñiga Yepsen se tiene igualmente por acreditado el parentesco entre el primero de los referidos y los demandantes, a saber: Segundo Ajenor Zúñiga Burgos y Eunice del Carmen Yepsen Monsálvez son ascendientes de primer grado por afinidad (suegros) de Enoc Jeremías Barto Rojas, y Nitza Pamela, Marjorie Vanessa, Fabián Ignacio y Alejandro Ajenor Zúñiga Yepsen son colaterales de segundo grado por afinidad de Enoc Jeremías Barto Rojas (cuñados).

El vínculo de parentesco así establecido entre los demandantes y las víctimas directas del hecho ilícito, unido a las circunstancias en que este ocurrió, por cuanto implicó el fallecimiento de un grupo familiar completo, formado por dos adultos y dos niños, en condiciones particularmente violentas según se desprende de los informes de



Foja: 1

autopsias que rolan en la carpeta investigativa de folio 69, al establecer la presencia de politraumatismo en las cuatro víctimas; permiten presumir que concurre en los actores dolor y sufrimiento por la pérdida de aquellas, configurándose así el daño moral entendido como *pretium doloris*, que es precisamente el que se demanda en estos autos.

Esta presunción se ve corroborada con la prueba testimonial rendida y que consiste en las declaraciones de los testigos Lucía Marisol Fernández Urrea y Carolina Beatriz Poloni Lagos, las que reúnen las exigencias del artículo 384 N° 2 del Código de Procedimiento Civil, ya que se encuentran legalmente juramentadas, sin tachas, han dando razón de sus dichos y son contestes en sus deposiciones, no habiendo sido estas desvirtuadas por prueba en contrario. Tal prueba testimonial unida a la presunción antes aludida permiten tener por acreditado el hecho de que la muerte de las cuatro víctimas directas con motivo del accidente citado, han causado en los actores sufrimiento o dolor, alteraciones en el estado anímico y dificultades psicológicas.

Lo razonado guarda también relación con el principio probatorio de la normalidad, según el cual quien alega lo normal, corriente u ordinario no tiene el peso de la prueba, el cual recae sobre quien sostiene lo anormal, excepcional o extraordinario; siendo lo normal sentir dolor por la muerte de un pariente cercano. En este sentido, la parte demandada no ha rendido ningún medio de prueba tendiente a demostrar que entre los actores y las víctimas directas existiese alguna animadversión u otra situación análoga que justifique la carencia de afecto entre ellos.

Cabe destacar que sobre el daño moral reflejo se ha fallado “Que, en lo que respecta al daño moral soportado por la cónyuge e hijos de la víctima a consecuencia de su muerte, el tribunal no puede sino establecer su procedencia a través de una prueba indirecta, en la medida que se trata de apreciar el dolor y sufrimiento que su pérdida les ha ocasionado y la forma en que ese hecho dramático ha impactado en sus vidas. Así, existe en primer lugar una presunción que surge del vínculo de parentesco entre la víctima y su grupo familiar, la cual se ve corroborada con el relato que hacen los testigos de los demandantes que rolan de fojas 357 a 360 y 371 a 377, del cual se desprende que es una familia que se vio fuertemente afectada por el fallecimiento del señor Ortiz Astudillo, sufriendo un estado emocional negativo que llevó tanto a los hijos como a la viuda a someterse a tratamiento psicológico y esta última, además, a uno de carácter psiquiátrico, lo que los testigos observaron por sus propios sentidos, presenciando, en ocasiones directamente, los dolorosos momentos vividos.” (Corte Suprema, sentencia de 28 de septiembre de 2016, Rol 7237-2015).

VIGESIMONOVENO: Que en cuanto al nexo causal, para que se genere la responsabilidad por el hecho ilícito es necesario que entre aquel y el daño exista una relación de causalidad, la que exige un vínculo necesario y directo. En este orden de ideas se sostiene que un hecho es condición necesaria de un cierto resultado cuando de no haber existido esta, el resultado tampoco se habría producido. Así, el autor Enrique Barros Bourie afirma que "El requisito de causalidad se refiere a la relación entre el



Foja: 1

hecho por el cual se responde y el daño provocado" y luego agrega que "...la causalidad expresa el más general fundamento de justicia de la responsabilidad civil, porque la exigencia mínima para hacer a alguien responsable es que exista una conexión entre su hecho y el daño" ("Tratado de Responsabilidad Extracontractual", Editorial Jurídica de Chile, página 373).

En la actualidad la doctrina nacional distingue dos elementos que son integrantes de la relación de causalidad, el primero es el denominado "elemento natural". En relación a este elemento, el autor citado señala que se puede establecer que "un hecho es condición necesaria de un cierto resultado cuando de no haber existido la condición, el resultado tampoco se habría producido" (obra citada, pág. 376). El segundo es el "elemento objetivo", para cuya configuración es indispensable que el daño producido pueda ser imputado normativamente al hecho ilícito. Así, una vez determinada la causalidad natural, se debe proceder a verificar si el daño puede ser atribuible a la conducta desplegada.

En la especie, de acuerdo a lo expuesto en los motivos precedentes, se concluye que la conducta ilícita del demandado Carrasco Leiva ocasionó la muerte de las cuatro víctimas directas, lo cual a su vez originó una aflicción o sufrimiento en los demandantes. En consecuencia, de no haber incurrido el demandado en aquella conducta ilícita, los actores no habrían padecido el daño moral que demandan. Este resultado es además atribuible objetivamente al hecho culpable del demandado, al haberse establecido su responsabilidad en sede penal por cuatro cuasidelitos de homicidio por conducir un vehículo motorizado infringiendo las normas del tránsito, según determina la respectiva sentencia condenatoria.

Acorde a lo anterior, ha quedado establecido el nexo causal necesario para perfeccionar la existencia de la responsabilidad extracontractual del demandado Carrasco Leiva, pues el hecho que le es atribuible fue la causa directa y necesaria del evento dañoso ya descrito.

TRIGÉSIMO: Que en cuanto al monto de las indemnizaciones, atendido el tipo de daño y la naturaleza de la indemnización, ha de determinarse prudencialmente.

De la prueba rendida se desprende la particular violencia de la colisión de tránsito que causó la muerte de las cuatro víctimas directas, atendido el tenor de los informes de lesiones –politraumatismos- y el hecho que la muerte fue instantánea. A ello cabe agregar que la víctima Sofía Lorena Zúñiga Ajenor, al 8 de octubre de 2013, tenía 27 años de edad, Enoc Jeremías Barto Rojas 28 años, Benjamín Enoc Barto Zúñiga 4 años y Pablo Andrés Barto Zúñiga, un año y cuatro meses de edad. Además, el accidente dio origen a una investigación y posterior juicio penal que duró más de dieciocho meses.

Tales circunstancias han de tenerse en cuenta al momento de avaluar el daño extrapatrimonial, pues permiten presumir la intensidad del perjuicio experimentado por los actores, considerando que lo normal es que tales particularidades incrementen el



Foja: 1

sufrimiento o dolor que padecen los seres humanos ante la pérdida de un familiar cercano.

Por otro lado, la prueba testimonial permite concluir que el hecho ilícito ha generado un perjuicio de mayor intensidad en los demandantes Segundo Ajenor Zúñiga Burgos y Eunice del Carmen Yepsen Monsáñez en su calidad de padres, abuelos y suegros de las víctimas directas. En efecto, la testigo Carolina Beatriz Poloni Lagos señaló que don Ajenor y doña Eunice han estado con depresión, que su forma de ser es distinta, antes eran alegres, ahora se ven depresivos y que la Sra. Eunice tuvo que dejar su trabajo de manipuladora de alimentos por el dolor de la pérdida de su hija, nietos y yerno. A su vez, la testigo Lucía Marisol Fernández Urrea refirió que el comportamiento de don Ajenor Zúñiga cambió por la muerte de su hija, nietos y yerno, que antes era un hombre fuerte, con capacidades de liderazgo, alegre y participativo, en cambio después del accidente siempre estaba triste, volvió a trabajar cinco meses después y no hablaba nada, estaba muy delgado, tenía crisis de pánico, depresión, que ha sido atendido por psicólogo y solo hablaba del accidente. Agregó que don Ajenor ha tenido un gran cambio de personalidad, habla dos palabras y se pone a llorar, que se ve su dolor.

Por el contrario, tratándose de los restantes actores, las dos testigos antes individualizadas solo hacen alusión a ellos en términos generales. Así, la testigo Lucía Marisol Fernández Urrea señala que la familia no se ha podido recuperar física y psicológicamente hasta la fecha, que se ve su agotamiento y que todos han pasado dificultades psicológicas. La testigo Carolina Beatriz Poloni Lagos agrega que toda la familia ha sufrido a consecuencia de la pérdida de las víctimas, han sido atendidos por psicólogos y médicos y que todos los demandantes han sufrido los daños.

En atención a lo expuesto y al vínculo de parentesco existente con las víctimas directas, la cuantía de la indemnización que se regulará en el caso de los actores Segundo Ajenor Zúñiga Burgos y Eunice del Carmen Yepsen Monsáñez será de mayor entidad que la del resto de los demandantes.

Así, la cuantía de la indemnización se fijará en la suma total de \$22.000.000 para cada uno de los demandantes Segundo Ajenor Zúñiga Burgos y Eunice del Carmen Yepsen Monsáñez, conforme a la siguiente proporción: \$12.000.000 por la muerte de la hija de los actores Sofía Lorena Zúñiga Ajenor, \$4.000.000 por cada uno de los nietos y \$2.000.000 por su yerno Enoc Jeremías Barto Rojas.

En el caso de los demás demandantes, se regulará el importe total de la indemnización en la suma de \$8.000.000 para cada uno de ellos, de acuerdo a la proporción que sigue: \$3.000.000 por la muerte de la hermana de aquellos Sofía Lorena Zúñiga Ajenor, \$2.000.000 por cada uno de sus sobrinos y \$1.000.000 por la muerte de su cuñado Enoc Jeremías Barto Rojas.

TRIGESIMOPRIMERO: Que las sumas por las que será acogida la demanda se reajustarán conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha del fallo hasta la fecha de su pago efectivo y devengarán



Foja: 1

intereses corrientes para operaciones reajustables desde la fecha en que quede firme la presente sentencia y hasta la fecha de su efectiva solución.

TRIGESIMOSEGUNDO: Que aun cuando ha de desecharse la demanda deducida contra del demandado Cristian Gallardo Gómez, resulta preciso dejar establecido que en el caso sub lite no concurren los presupuestos de la exposición imprudente al riesgo de la víctima directa Enoc Barto Rojas alegada por aquella parte, toda vez que tal defensa se funda en que Barto Rojas conducía con las luces apagadas, circunstancia que no es posible tener por acreditada en estos autos, pues ninguna prueba directa se rindió que permita así estimarlo. A la misma conclusión arriba la sentencia condenatoria pronunciada en sede penal, que se funda en la declaración de un testigo y en la prueba pericial incorporada y que desestima la testimonial rendida en sentido contrario.

Finalmente, cabe dejar asentado que el demandado Javier Carrasco Leiva no formuló defensa alguna basada en el artículo 2330 del Código Civil.

TRIGESIMOTERCERO: Que la restante prueba rendida en nada altera las conclusiones anteriores. En efecto, el certificado de matrimonio celebrado entre Segundo Ajenor Zúñiga Burgos y Eunice del Carmen Yepsen Monsálvez, solo da cuenta del vínculo matrimonial vigente entre ambos.

El certificado de inscripción y anotaciones vigentes acompañado a folio 1 permite establecer que la demandada solidaria Empresas de Transportes Rurales Limitada es dueña del vehículo placa patente única FWVR.12-6 y el certificado relativo al automóvil placa patente única YA.1738-1, que su propietario al 8 de octubre de 2013 era el demandado Javier Carrasco Leiva.

En cuanto a los instrumentos acompañados a folio 84, no se les otorgará valor probatorio alguno por tratarse de documentos privados que emanan de un tercero que no los reconoció en juicio. Lo mismo ocurre con los instrumentos acompañados por el demandado Javier Carrasco Leiva a folio 59 y 61, es decir, al emanar de un tercero que no compareció al juicio a reconocerlos carecen de valor probatorio.

Los documentos acompañados a folio 74 por el demandado Cristián Gallardo Gómez, consistentes en copia del Decreto N° 22 y 181 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, solo dan cuenta de la obligación de todo vehículo de transitar con luces encendidas. Al set de 14 fotografías de folio 14 tampoco se le reconocerá mérito probatorio al tratarse de instrumentos privados no reconocidos en juicio por el tercero del cual emanan.

Finalmente, nada nuevo agrega el instrumento electrónico acompañado a folio 76 a través de la audiencia de percepción documental, pues solo hace alusión a los hechos ya establecidos en el considerando decimoséptimo precedente.

TRIGESIMOCUARTO: Que no habiendo sido completamente vencido el demandado Javier Carrasco Leiva no será condenado en costas.



Foja: 1

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698, 1700, 1702, 1712, 1713, 2284, 2314 y 2329 del Código Civil; 144, 160, 170, 341, 342, 346, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil y 169 de la Ley 18.290, se declara:

I.- Que se rechazan, sin costas, las objeciones documentales formuladas a folio 2 del cuaderno de objeción documental 2.0 y a folio 3 del cuaderno de objeción de documentos 4.0.

II.- Que no se hace lugar a las excepciones perentorias de falta de competencia para conocer de un ilícito penal opuestas a folio 25 y 27.

III.- Que se desestima la excepción de prescripción extintiva formulada a folio 25.

IV.- Que se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa interpuestas a folio 25 y 27.

V.- Que ha lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida a folio 1, solo en cuanto se condena al demandado JAVIER ANDRÉS CARRASCO LEIVA a pagar la suma total de \$22.000.000 (veintidós millones) para cada uno de los demandantes SEGUNDO AJENOR ZÚÑIGA BURGOS y EUNICE DEL CARMEN YEPSÉN MONSÁLEZ y \$8.000.000 (ocho millones) para cada uno de los actores NITZA PAMELA, MARJORIE VANESSA, ALEJANDRO AJENOR y FABIÁN IGNACIO ZÚÑIGA YEPSÉN, el último representado por su madre Eunice del Carmen Yepsen Monsáñez, conforme a la proporción detallada en el considerando trigésimo de este fallo, por concepto de indemnización de daño moral; cantidades que se pagarán reajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de la sentencia y hasta la época del pago efectivo y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables desde la fecha en que el fallo quede ejecutoriado y hasta la fecha de su efectivo pago.

VI.- Que se rechaza en todas sus partes la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida contra los demandados Cristian Ismael Gallardo Gómez y Empresa de Transportes Rurales Limitada.

VII.- Que no se condena en costas al demandado Javier Carrasco Leiva. Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol C-284-2017.

Dictada por doña **ANDREA VALERIA RODRÍGUEZ FERRADA**, Juez Titular del Juzgado de Letras y Garantía de Lebu.



C-284-2017

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Lebu, veinticuatro de Enero de dos mil veinte**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>

Andrea Valeria Rodriguez Ferrada
Fecha: 24/01/2020 08:59:28

NOMENCLATURA : 1. [46]Aclara o rectifica sentencia
JUZGADO : Juzgado de Letras y Gar.de Lebu
CAUSA ROL : C-284-2017
CARATULADO : ZÚÑIGA/empresa de transportes rurales Tur Bus Ltda.

Lebu, treinta de Junio de dos mil veintiuno

Visto y teniendo presente:

Atendido el mérito de los autos y de conformidad a lo ordenado por la ltma. Corte de Apelaciones de Concepción con fecha 24 de junio del año en curso, se complementa la sentencia definitiva de 24 de enero de 2020, rolante a folio 102, en el siguiente sentido:

1.- Que en el número V de la parte resolutive de la sentencia, después de la frase “devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables” se agrega la expresión “de menos de un año”, quedando en definitiva el numeral V después del punto y coma con el siguiente tenor:

“cantidades que se pagarán reajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de la sentencia y hasta la época del pago efectivo y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables de menos de un año desde la fecha en que el fallo quede ejecutoriado y hasta la fecha de su efectivo pago”.

2.- Que se agrega al final del número VI de la parte resolutive de la sentencia la expresión “sin costas”, quedando en definitiva este numeral del siguiente tenor:

“Que se rechaza en todas sus partes la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida contra los demandados Cristian Ismael Gallardo Gómez y Empresa de Transportes Rurales Limitada, sin costas.”

3.- Téngase a la presente resolución como parte integrante de la sentencia que se complementa.

Notifíquese a las partes por cédula por receptor de turno.

Apareciendo de los antecedentes que el demandante Fabián Ignacio Zúñiga Yepsen habría cumplido mayoría de edad, notifíquese al referido litigante personalmente la sentencia definitiva de folio 102, el recurso de apelación de folio 109, la resolución que concedió el recurso de folio 110 y las piezas pertinentes de la tramitación del recurso ante la Ilustrísima Corte de Apelación de Concepción, junto con la presente resolución. Notifíquese por receptor de Turno.

Resolvió doña Andrea Valeria Rodríguez Ferrada, Jueza Titular del Juzgado de Letras y Garantía de Lebu.

En Lebu, a treinta de Junio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. rbp.



